



— Universidad —
Inca Garcilaso de la Vega

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

TESIS

CONFLICTOS FUNCIONALES ENTRE EL ROL MINISTERIO
PÚBLICO Y EL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, EN LA CIUDAD DE
HUANCAYO, 2019.

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

ABOGADO

AUTOR

RENZO RAFAEL, NOA RAMOS.

ASESOR

MAG. SANDRO PAREDES QUIROZ.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

DERECHO PROCESAL PENAL.

HUANCAYO, PERÚ, MARZO DE 2022

DEDICATORIA:

A mi madre, por su amor incondicional. A mis hijas, esposa y hermano, por el amor y cariño siempre.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al asesor de esta tesis, Dr. Gian Carlos Mantari, por la dedicación y apoyo al presente trabajo, por el respeto a nuestras sugerencias e ideas, por la dirección y el rigor que ha facilitado a las mismas.

Asimismo, en segundo lugar, expreso mi más sincera gratitud a cada una de las personas que intervinieron en el desarrollo de la presente, por brindarme su apoyo moral, tiempo y conocimientos, así como al personal que me apoyó en la recolección de los datos de la presente tesis.

LISTA

RESUMEN	v
INTRODUCCIÓN	vi
CAPÍTULO I	1
PROBLEMA	1
1.1. EL PROBLEMA	1
1.1.1. Planteamiento del problema	1
1.1.2. Formulación del problema	3
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	3
1.2.1. Objetivo general	3
1.2.2. Objetivos específicos	3
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	4
1.3.1. Justificación teórica	4
1.3.2. Justificación metodológica	5
1.3.3. Justificación práctica	5
1.3.4. Justificación social	6
1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	6
1.4.1. Delimitación temporal	6
1.4.2. Delimitación espacial	6
1.4.3. Delimitación social	7

CAPÍTULO II	8
MARCO TEÓRICO	8
2.1. Antecedentes teóricos de la investigación	8
2.2. Bases teóricas	12
2.2.1. La Policía Nacional del Perú	12
2.2.2. El Ministerio Público	23
2.3. Teorías imperantes	56
2.4. Teoría seleccionada	58
2.5. Marco histórico	60
2.6. Marco jurídico	63
2.7. Marco conceptual	64
CAPÍTULO III	66
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	66
3.1. Tipo de investigación	66
3.2. Diseño de investigación	66
3.3. Universo, Población y muestra	66
3.4. Métodos	67
3.5. Técnicas	68
3.6. Instrumentos	68
3.7. Conclusiones	84
3.8. Recomendaciones	85

REFERENCIAS	86
ANEXOS	88

RESUMEN

La investigación parte del problema: ¿existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019?, siendo el objetivo: determinar si existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019; la investigación se ubica dentro del tipo básica, en el nivel relacional, se utilizaron los métodos: inductivo – deductivo. Para la recolección de información se utilizarán el análisis documental y la observación. Como instrumento de investigación se utilizó el cuestionario.

La presente investigación demostró que existen conflictos funcionales, entre Ministerio Público (MP) y Policía Nacional del Perú (PNP), principalmente por la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación del delito, al haber confusión en lo concerniente a esa conducción operativa, por parte del Ministerio Público, proveniente de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal y que ha influido en la inseguridad ciudadana.

Como conclusión se ha establecido que: existen determinados conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, que se evidencian al momento de incoarse la etapa de investigación preparatoria, y precisamente en la sub etapa de diligencias preliminares, ya que la falta de capacitación entre los servidores públicos de ambas instituciones ocasiona cierta duplicidad de funciones.

Palabras claves: Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Conducción de la investigación, Funciones criminalísticas.

ABSTRACT

The investigation starts from the problem: are there functional conflicts between the role of the Public Ministry and that of the National Police of Peru, in the city of Huancayo, 2019?, being the objective: to determine if there are functional conflicts between the role of the Public Ministry and that of the National Police of Peru, in the city of Huancayo, 2019; the research is located within the basic type, at the relational level, the methods were used: inductive - deductive. For the collection of information, documentary analysis and observation will be used. The questionnaire was used as a research instrument.

The present investigation showed that there are functional conflicts between the Public Ministry (MP) and the National Police of Peru (PNP), mainly due to the conduct and legal control and operational conduct of the investigation of the crime, as there is confusion regarding that operational conduct. , by the Public Ministry, from the application of the New Code of Criminal Procedure and that has influenced citizen insecurity.

As a conclusion, it has been established that: there are certain functional conflicts between the role of the Public Prosecutor's Office and that of the National Police of Peru, which are evident at the time of initiating the preparatory investigation stage, and precisely in the sub-stage of preliminary proceedings, since that the lack of training among the public servants of both institutions causes a certain duplicity of functions.

Keywords: Public Ministry, National Police of Peru, Conduct of the investigation, Criminalistic functions.

INTRODUCCIÓN

La investigación parte del problema: ¿existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019?, siendo el objetivo: determinar si existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019; la investigación se ubica dentro del tipo básica, en el nivel relacional, se utilizaron los métodos: inductivo – deductivo. Para la recolección de información se utilizaron el análisis documental y la observación. Como instrumento de investigación se utilizó el cuestionario.

La presente investigación demostró que existen conflictos funcionales entre el MP y PNP, principalmente por una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas de ambas instituciones, proveniente de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal y que ha influido en la inseguridad ciudadana.

Como resultados principales se han fijado que existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, porque a nivel operativo y práctico la Policía muchas veces realiza su labor sin considerar la actuación material de la Fiscalía, generando una duplicidad innecesaria de labores y carga procesal. Asimismo, existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

La investigación se encuentra estructurada por tres capítulos:

En el capítulo I, la descripción del problema describe la descripción de la realidad problemática y la formulación del problema principal, secundario, a través de la justificación y las

limitaciones, se mantiene el valor científico de la investigación, así como sus objetivos de la investigación.

El Capítulo II presenta el marco teórico, los antecedentes de la investigación, preparados por la tesis, se escribe el marco histórico, se presentan las bases teóricas básicas y el marco conceptual que determina los términos más utilizados en la investigación.

En el capítulo III: La metodología de investigación presenta el método, tipo, nivel y diseño del método de investigación, así como la población, la muestra y la tecnología de investigación.

Al final, se presentan las conclusiones, recomendaciones y las fuentes bibliográficas que han sido consultadas y los apéndices.

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Marco teórico

1.1.1. La Policía Nacional del Perú

1.1.1.1. Concepto, etimología y dimensiones conceptuales de la institución policial

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus

alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

En su noción terminológica, como puede encontrarse en (Ferrecio, 1999), la palabra policía deriva del griego “*politeia*”, que significa “ciencia de los fines y deberes del estado”. En efecto, “*politeia*” era el conjunto de instituciones que integraban la ciudad o la llamada “*polis*”. Igual significado, dice (Flores, 2002), tiene la voz latina “*politia*.”

En la doctrina clásica, como la que deviene de Francia, autores como (Ranelletti, 1908), señalan que por medio de la institución policial:

“se aprende a gobernar al pueblo en justicia, a mantener en paz a los habitantes de una ciudad, a sujetar a cada uno a su deber, a vigilar las obras para que no se cometan fraudes y a atender que el comercio sea ejercido con lealtad” (p. 262).

Por otro lado, para (Le Brett, 1988), la Policía, en tanto entidad, se encuentra ordenada por:

“las leyes y ordenanzas que se han publicado en los Estados bien ordenados para regular los abastecimientos, cortar los abusos y los monopolios del comercio y de las artes, impedir la corrupción de costumbres, cortar el lujo y desterrar de las ciudades los juegos ilícitos- , todo esto ha merecido el nombre particular de Policía, porque sería imposible que una ciudad pudiese subsistir mucho tiempo, si estas cosas fueran descuidadas” (p. 257)

Para Bacquet, citado por (Nieto, 1986), señala que la policía, implica el “ejercicio que contiene en sí todo lo que es necesario para la conservación y mantenimiento de los habitantes y del bien público de una ciudad” (p. 38).

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú,

principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

Ahora bien, en lo revisado de (Hinostroza, 2008), el concepto de policía, que ya hemos revisado previamente, tiene según el referido autor, múltiples dimensiones, las cuales son:

a) Policía como función de Estado:

Constituyéndose en instrumento de gobierno para hacer cumplir las leyes, mantener el orden y la seguridad, procurando el equilibrio entre los derechos y libertades de las personas para garantizar el bien común. La función policial es eminentemente social, la razón de su existencia es para proteger los derechos de las personas para que puedan ejercer a plenitud sus libertades.

b) Policía como poder:

Facultad del Estado de restringir los derechos de las personas en relación con los derechos de los demás.

Esta función, tiene como característica fundamental que la policía representa a nivel material el poder de coerción estatal, y es una función clásica en esta institución.

c) Policía como forma de vida:

Es la demostración de circunspección, aseo higiene, salubridad, conducta decorosa en el medio social y en la vida privada.

1.1.1.2. Acto y poder respecto de la institución policial

Se trata de dos aspectos vinculantes del quehacer policial como institución, de modo que, según la doctrina jurídica social, se describirá su contenido a continuación.

En primer lugar, respecto del acto policial, se conceptualiza como:

“un determinado hecho social en el cual participa un agente, funcionario o servidor policial en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones tanto en la fase preventiva, investigativa, conciliadora de apoyo a la justicia y seguridad, en relación a la finalidad fundamental que le asigne el Estado” (Vásquez, 2011, p. 24).

Otro de los preceptos objeto de revisión, es el de poder de policía, entendiendo de manera preliminar que el poder se define como “la potestad, el imperio dominio, facultad la capacidad de lograr obediencia, de imponer la propia voluntad y anular los planes contrarios: implica fuerza, vigor, posibilidad, poderío” (Flores, 2002, p. 202). Así pues, se le entiende como la suprema potestad rectora del Estado.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

En ese sentido, conociendo el contenido de lo que el término poder involucra, el poder policial, comenta (Hinostroza, 2008), es:

“la función o poder del estado que establece límites a la libertad individual, con el fin de asegurar esta libertad y los derechos esenciales del hombre, evita que se produzcan actos y hechos contrarios al derecho. Los derechos individuales son limitados por el interés colectivo” (Manosalva, 2013, p. 23).

Ahora bien, este poder policial, según refiere el citado (Manosalva, 2013), se imbrica a propósito de un conjunto de caracteres, los cuales según los referidos autores son:

1) Razonable:

Los actos de poder no pueden exceder los motivos de necesidad o interés público, de hacerlo induciría a pensar en un poder arbitrario, contrarios al régimen de derecho; debe ser justo, equitativo y conveniente.

2) Limitativa:

Su uso extremo se funda en una necesidad pública, hasta llegar a la abrogación de ciertos derechos, solo en circunstancias excepcionales y por un claro de interés general que obligue a estado a sacrificar los intereses individuales, en beneficio del bien común.

3) Originaria:

Es una potestad que le estado la adquirió en el momento de constituirse como tal.

4) Es exclusiva del Estado:

En tanto su empleo es facultad incondicional del aparato estatal en todo el territorio nacional

5) Incondicional:

El Estado puede en uso de sus poderes legislativos modificar el derecho existente y reglamentar en forma distinta su propia organización y todas las actividades que se desarrollan en la nación.

1.1.1.3. La función policial

Ahora bien, según la doctrina, los fundamentos de la función Policial, como menciona el ya referido (Hinostroza, 2008), son los que siguen:

Ahora bien, según la doctrina, representada por (Hinostroza, 2008), las funciones básicas de policía, se dividen en los siguientes aspectos:

a) Preventiva:

Para la protección de la seguridad y derechos del ciudadano.

b) Disuasiva:

Induce al desistimiento del propósito delictivo o irregular.

c) Investigativa:

Frente a las infracciones especiales e de la ley penal.

d) Protectora:

Frente a la violación de los derechos libertades y el patrimonio público y privado.

e) De auxilio:

Frente a los desastres y emergencias de las personas.

f) De apoyo:

Frente a los pedidos de las autoridades.

g) De conciliación:

Frente a los conflictos menores de no constituyan infracciones penales.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

1.2.1. El Ministerio Público

1.2.1.1. Breves antecedentes históricos institucionales

La Convención de 1855 aprobó la Ley sobre organización del Ministerio Público, cuyas funciones son resumidas por nuestro historiador Jorge Basadre: "aparte de la supervigilancia del Poder Judicial y, en especial (se refería al Fiscal

de la Nación) sobre los Fiscales de las Cortes y Agentes Fiscales, le correspondía dictaminar en los asuntos y casos que le competían según la Ley de ministros; cuidar que todo funcionario público cumpliera la Constitución y las leyes; dar parte al Congreso sobre las infracciones de cualquier funcionario de la República, inspeccionar las oficinas del Estado y todo establecimiento público o corporación legal sin excepción alguna, dando parte de los abusos y de las transgresiones de las normas legales y reglamentarias; cautelar que las elecciones populares se verificaran con plena libertad y en los tiempos designados". Aparte de ello, durante mucho tiempo, al Ministerio Público se le mantuvo como defensor del Estado en juicios.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

1.2.1.2. Acercamiento conceptual

De manera institucional señala el propio (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2014), reconoce que en esencia se trata de “un organismo constitucionalmente autónomo, que cumple funciones transcendentales dentro de la administración de justicia (como parte, dictaminador u tercero con interés), en la sociedad (la representa en juicio) y el Estado (previenen el delito, y es la autoridad central en materia de cooperación judicial)” (p. 78).

1.2.1.3. Finalidad y caracteres

En la redacción de su plan institucional, el (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2014), establecer los siguientes caracteres, según explica (Lauregui & otros, 2009), que estos son:

- a) Constituye un cuerpo orgánico: la institución del Ministerio Público constituye una entidad colectiva, carácter que principia a apuntarse en un Código de Procedimientos Penales de 1880 y se señala con precisión en la Ley Orgánica del Ministerio Público de 1903.
- b) Actúa bajo una dirección: a partir de la Ley Orgánica en 1903, el Ministerio Público actúa bajo la dirección de un Procurador de Justicia.
- c) Depende del Ejecutivo: el Ministerio Público depende del poder ejecutivo, siendo el Presidente de la República el encargado de hacer el nombramiento de Procurador General de Justicia.

- d) Representa a la sociedad: a partir de la Ley Orgánica de 1903 el Ministerio Público se estima como representante de los intereses sociales y es el encargado de defenderlos ante los Tribunales.

1.2.1.4. Aspectos funcionales

En ese sentido, replica (Hinostroza, 2008) que, es importante precisar que al paso del tiempo se les ha dado mayores atribuciones a los miembros del Ministerio de Público, así como al como al Fiscal de la Nación.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales

1.2.3. Funciones competenciales de acuerdo al Código Procesal Penal de 2004

La oralización del proceso implica que en las audiencias prima el contradictorio, significa que ambas partes tienen la posibilidad de plantear su tesis, de acusación (el Ministerio Público) o de defensa (el procesado); que las partes realizarán sus alegaciones,

peticiones, solicitudes y requerimientos verbalmente; y tienen que plantear y sustentar oralmente su “teoría del caso”. Con relación a la publicidad, debemos realizar un análisis aparte.

Respecto a la publicidad, la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que la administración de justicia emana del pueblo; sin embargo, en un proceso penal como el que actualmente rige en la mayor parte del territorio nacional, en el que el 90% de las causas se tramita por la vía sumaria (escrita, reservada, en la que el juez es quien investiga y quien resuelve), no hay ningún tipo de intervención del pueblo. Hay países en los que existen jurados populares y otros en los que existen jueces del pueblo. La publicidad en los procesos penales garantiza que el ciudadano intervenga en la administración de justicia ejerciendo un control o fiscalización de las actuaciones judiciales y de la forma en que los jueces administran justicia. Solo si el pueblo puede asistir a las diligencias judiciales (obviamente no en etapa de investigación preparatoria, sino en el juzgamiento propiamente dicho) podrá ejercer su derecho a la crítica, a la opinión e información de cómo se viene comportando determinado magistrado. Ese es un derecho fundamental que controla la actuación de los órganos jurisdiccionales.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales

El NCPP se inspira en el mandato constitucional de respeto y garantía a los derechos fundamentales de la persona, el cual se encuentra recogido en los artículos I, II,

III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Título Preliminar del NCPP, que reconocen los derechos a la gratuidad de la administración de justicia penal, imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, garantía de juicio previo, oral, público y contradictorio, igualdad procesal, doble instancia, presunción de inocencia, interdicción de la persecución penal múltiple, motivación de las resoluciones, legalidad de las medidas limitativas de derechos, legitimidad de la prueba, inviolabilidad de la defensa, entre otros. Dichas normas son fuente y fundamento para la interpretación de las demás normas que regulan el proceso penal (artículo X del TP).

En el año 1991 se realizaron serios intentos de cambiar el Código de Procedimientos Penales; sin embargo, debido a la coyuntura política del momento, a lo que se sumó el autogolpe del 5 de abril del año 1992, no existió una verdadera voluntad política de cambio, por lo que solo unos pocos artículos del Código Procesal Penal de 1991 entraron en vigencia.

En las ciudades en las que ya entró en vigencia el NCPP, se ha producido una transformación en el modelo de organización y funcionamiento de las instituciones del sistema penal en su conjunto, se trata de un cambio de paradigmas, de concepción de cuáles son los roles de los operadores de la justicia penal, sus facultades y competencias. El NCPP cambia lo escrito por lo oral, lo reservado por lo público, lo secreto por lo transparente.

Cuántas veces nos ha sucedido a los abogados litigantes que acudimos a leer un expediente y se nos pretende restringir la lectura del mismo debido a que el procesado aún no ha rendido su declaración instructiva, pese a encontrarnos apersonados. Cuántas veces la Policía no nos ha mostrado los documentos que obran en la investigación, o nos

ha ocultado la existencia de una o más declaraciones o actas de diligencias, bajo el argumento de que la investigación policial es reservada.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

Con el nuevo código eso no puede suceder; ahora el proceso para las partes y sus abogados es transparente, no es posible ocultar a ninguna de las partes información o documentación relacionada con las diligencias actuadas, en ninguna instancia del proceso. Es evidente que, en casos especiales, será posible mantener en secreto alguna diligencia; sin embargo, ello solo se producirá cuando se haya decretado la reserva o el secreto de la investigación, la cual incluso debe ser notificada a las partes (artículo 324 del NCPP).

Otra garantía que se introduce en el NCPP es la separación de las funciones de persecución [del Ministerio Público], y de decisión [del Poder Judicial]. Dicha separación de roles se encuentra conforme al principio acusatorio y a la garantía de imparcialidad del juzgador. Este cambio es fundamental, toda vez que en el proceso penal sumario es el juez quien cumple la función persecutoria, quien investiga y decide.

Si bien es el fiscal quien dirige la investigación, el juez está facultado a requerir la realización de alguna diligencia si considera que faltan elementos de convicción para que se diluciden los hechos, o puede hacer preguntas a los inculpados, agraviados o testigos si considera que hay algún punto que no ha quedado debidamente esclarecido. Los jueces

deben ejercer su facultad de intervención de manera excepcional, en los casos que efectivamente lo ameriten.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

Un dato de fundamental relevancia es que el NCPP elimina el inconstitucional proceso sumario, estableciendo un proceso común para todos los delitos, sin excepción, en el cual el juicio es la fase más importante, ya que es en dicha etapa donde se ejercen los derechos al contradictorio, a lo adversarial, a la oralidad, a la publicidad, a la concentración de las actuaciones judiciales, a la igualdad de armas, a la defensa, entre otros. En el juicio, las partes deben presentar su “teoría del caso”, exponiendo oralmente los hechos relevantes, la subsunción normativa –en este análisis se encuentra la tipicidad objetiva y subjetiva, las causas de justificación: legítima defensa, actuar en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, entre otros–, y haciendo referencia a las pruebas que sustentan su tesis. La “teoría del caso” es una innovación del NCPP, que permite que en el proceso penal se hagan efectivos los derechos detallados –no excluyentemente– en el Título Preliminar del NCPP.

Adicionalmente a lo expuesto, el NCPP desarrolla un conjunto de facultades discrecionales a cargo del Ministerio Público como, por ejemplo, la facultad de no investigar frente a denuncias que no merecen el desarrollo de una investigación fiscal. Así tenemos que el artículo 334, numeral 1 del NCPP establece que si el fiscal al calificar una denuncia, habiendo realizado o no una investigación preliminar (el NCPP la

denomina diligencias preliminares), considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar –la denuncia– y continuar con la investigación preparatoria. En ese mismo sentido tenemos el artículo 65, inciso 2 del NCPP, el cual establece que “el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará–si correspondiere– las primeras diligencias preliminares, o dispondrá que las realice la PNP”. En consecuencia, con el NCPP el fiscal puede archivar una denuncia sin siquiera disponer la realización de una investigación preliminar. Ello no quiere decir que se vulneren los derechos de los denunciantes ya que la resolución de archivo tiene que ser debidamente fundamentada y es recurrible ante el Superior Jerárquico.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales

Otras facultades discrecionales que reconoce el NCPP al Ministerio Público son los mecanismos de abstención para el ejercicio de la acción penal, como el criterio de oportunidad y los acuerdos reparatorios. La idea de estas facultades discrecionales es regular la carga procesal, de tal forma que solo sean judicializados aquellos casos realmente importantes.

La suma de todos estos factores ha originado un gran cambio en el rol de los operadores judiciales, siendo el más importante el del Ministerio Público.

- En la investigación preparatoria:

La investigación preparatoria comprende la secuencia sucesiva de dos momentos, los cuales pueden identificarse como: a) las diligencias preliminares (que son la investigación preliminar), y b) la investigación preparatoria en puridad. Constituye la actividad de investigación que busca reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Su finalidad es determinar si la conducta investigada tiene características de delito, cuáles fueron las circunstancias y móviles de su comisión, e identificar a los autores, a los partícipes y a la víctima, así como determinar la existencia del daño causado (artículo 321, inciso 1 del NCPP).

No puede haber juicio oral si previamente no se han reunido los elementos de convicción que sustenten la acusación, cuya existencia es condición para el inicio del juicio oral. Sin acusación no hay juicio. La investigación preparatoria es la etapa de preparación del juicio oral.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales

Tal como se ha indicado, la investigación preparatoria también se realiza con el objetivo de buscar, recolectar y reunir los elementos de descargo que permitan a la defensa diseñar su estrategia, preparar su “teoría del caso”, o, cuando no se presenten, acogerse al principio de oportunidad o a la terminación anticipada.

- **El fiscal como director de la investigación preparatoria:**

Lo expuesto tiene como sustento el artículo 159, inciso 4, de la Constitución Política del Estado, que establece que el Ministerio Público es quien “conduce desde su inicio la investigación del delito”, y que, con tal propósito, la Policía está obligada a cumplir sus mandatos en el ámbito de su función. En ese sentido, el artículo IV, numeral 1 del Título Preliminar del NCPP establece que “el Ministerio Público es el titular de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba”, y es quien asume la conducción de la investigación desde su inicio.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

En igual sentido, el artículo 60, numeral 2, señala que el fiscal conduce la investigación desde su inicio, y con tal propósito cuenta con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). La actuación del Ministerio Público se inicia: 1) a raíz de una denuncia de parte (artículo 326 del NCPP), que puede ser interpuesta por la víctima, por cualquier persona, o por personas que se encuentran obligadas a ello, tales como los profesionales de la salud, los educadores, los funcionarios públicos o los jueces no penales en las causas que estén bajo su jurisdicción (artículo 10 del NCPP); 2) a raíz de una noticia policial (artículos 67 y 331 del NCPP); 3) de oficio (artículos 65.2 y 329.2 del NCPP).

Conducir significa “guiar o dirigir hacia un sitio”, por lo que la conducción de la investigación implica guiarla, dirigir los actos y las diligencias a llevarse a cabo en la investigación. Esa facultad de dirección lleva consigo la de determinar las diligencias que deben llevarse a cabo, cuándo, cómo, en qué orden de prelación. Es el fiscal quien decide qué oficios cursar, qué solicitudes, a qué entidades, a quiénes citar, el orden de las declaraciones, para –habiendo recogido y analizado toda la información relevante para el caso–, emitir un pronunciamiento.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales

La estrategia deberá ser diseñada dependiendo del tipo de delito del que se trate, y estar destinada a esclarecer los hechos investigados, e individualizar a sus autores y partícipes (artículo 65.4 del NPP). Evidentemente, en el curso de una investigación se producirá o se obtendrá información circunstancial pero relevante, la cual debe aplicarse a la estrategia de investigación que se ha adoptado.

Tal como señala el Dr. Sánchez Velarde, se otorga al Ministerio Público el monopolio del ejercicio público de la acción penal y se le faculta para dirigir la investigación del delito, quedando la PNP bajo su supervisión funcional.

Para que el Ministerio Público pueda conducir una investigación eficientemente, debe contar con el apoyo de la PNP, cuyos miembros se encuentran obligados a los mandatos del fiscal en el marco de la investigación de los delitos (artículos 67, 68 y 332

del NCPP). En caso de que una persona presente su denuncia penal directamente a la PNP, o que esta haya tomado conocimiento de oficio sobre la comisión de algún hecho delictivo, tiene que comunicárselo de inmediato al fiscal. El fiscal dirige la actuación de las diligencias en las que participa, pues solo él sabe qué busca acreditar con su actuación, los efectivos policiales actúan como importante apoyo a la labor del fiscal.

Una vez culminada la investigación, el fiscal puede disponer su archivo o formalizar la investigación preparatoria ante el Poder Judicial. Es decir, luego de realizadas las diligencias preliminares el fiscal puede disponer el archivo por considerar que no hay indicios de la comisión del delito, porque no hay indicios de que el imputado sea el autor, por haber prescrito la acción penal, porque los hechos no son justiciables penalmente, por aplicación del principio de oportunidad, entre otros. Sin embargo, luego de formalizada la investigación preparatoria el fiscal ya no podrá disponer el término de la investigación, sino que será el juez quien dispone el archivo definitivo de esta.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales

- El fiscal tiene el deber de actuar con objetividad en el marco de la investigación preparatoria:

El artículo IV, numeral 2 del Título Preliminar del NCPP establece que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, aquellos que determinen y acrediten la responsabilidad del

inculpado, y los que acrediten su inocencia. Lo expuesto también se encuentra recogido en el artículo 61 del NCPP, el cual establece que los fiscales deben actuar con independencia de criterio, adecuando sus actos a un criterio de objetividad regido únicamente por la Constitución y la ley.

Es en la investigación preparatoria donde el fiscal actúa con deber de objetividad. Una vez que formula la acusación, deja de estar sujeto al deber de objetividad referido debido a que, al formular la acusación, es evidente que tiene claro que se ha cometido el delito investigado y que el acusado es el responsable penalmente. En tal sentido, teniendo en consideración que en el juicio oral el fiscal debe ser parte activa en el proceso, en esta etapa no sería lógico exigirle objetividad, pues en todo momento actuará defendiendo su pretensión punitiva.

- En las diligencias preliminares:

Esta etapa se inicia después de tener conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Puede iniciarse por disposición del fiscal, ya sea de oficio o a petición de parte (artículo 329 del NCPP), o puede iniciarse por actuación inmediata de la PNP (artículo 331 del NCPP).

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

La decisión del fiscal de llevar a cabo diligencias preliminares es discrecional (artículos 330, 334 y 336 del NCPP), el fiscal al momento de calificar la denuncia tiene las siguientes alternativas: 1) archivar la investigación; 2) reservar provisionalmente la investigación por falta de requisitos de procedibilidad; 3) requerir la realización de una investigación policial para que se determine la comisión del delito y/o se identifique al autor y/o partícipes; 4) abstenerse del ejercicio de la acción penal en delitos no graves, por aplicación del principio de oportunidad o procedencia de un acuerdo reparatorio; 5) formalizar y continuar la investigación; 6) formular directamente la acusación penal.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales

Con el NCPP puede darse el caso que no exista necesidad fáctica de que se lleven a cabo las diligencias preliminares para formalizar la investigación preparatoria, lo cual no implica que estemos ante una investigación fiscal incompleta o deficiente, ya que de la sola denuncia pueden presentarse los requisitos mínimos que lo justifiquen. Incluso puede formularse acusación directa sin haberse llevado a cabo una investigación preliminar. Las diligencias preliminares solo se realizarán si aparece razonablemente la necesidad de su actuación.

La finalidad primordial de las diligencias preliminares es realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y si estos tienen características de delito, así como asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a los partícipes, testigos y agraviados. Las diligencias preliminares se

pueden realizar en el propio despacho del fiscal o en sede policial –cuando así lo determine el fiscal–. Incluso, en caso de que se presente una denuncia en sede policial, la PNP debe comunicar al fiscal de inmediato acerca de su presentación, y este deberá emitir su resolución disponiendo la apertura de la investigación policial y detallando qué diligencias deben llevarse a cabo. El fiscal “conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la PNP” (artículo IV.2 del NCPP). Obviamente, en tanto el fiscal es el director y conductor de la investigación, también puede solicitar a la PNP que se abstenga de realizar diligencias y remita a su despacho los actuados, bajo responsabilidad.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales

Cuando interviene la PNP en la investigación preliminar, elevará un informe policial al fiscal correspondiente adjuntando las actas, documentos recabados, declaraciones, pericias realizadas, inspecciones técnico-policiales, informes, entre otros (artículo 332 del NCPP). En el informe policial no hay calificaciones jurídicas ni atribución de responsabilidades, únicamente debe haber un detalle de las diligencias llevadas a cabo.

En los distritos judiciales en los que continuamos aplicando el Código de Procedimientos Penales de 1940, la PNP culmina sus investigaciones emitiendo partes y atestados, donde los efectivos policiales califican jurídicamente los hechos y atribuyen responsabilidad penal, a pesar de que en el 99% de los casos no tienen conocimientos de

Derecho, vulnerándose de esa manera el principio constitucional de presunción de inocencia que sustenta el sistema acusatorio y que se encuentra reconocido por la Constitución Política del Estado en su artículo 2.24.f.

Cuando el fiscal decide archivar definitivamente la investigación, el denunciante o agraviado puede impugnar vía queja, elevándose la investigación al fiscal superior, quien decidirá en definitiva si ordena que se formalice la investigación preparatoria o se archive de manera definitiva (artículo 334, numeral 6 del NCPP).

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

- Plazo de las diligencias preliminares:

En aquellos lugares donde aún no ha entrado en vigencia el NCPP, tenemos que una investigación preliminar no tiene un plazo determinado. Los abogados litigantes venimos sufriendo las consecuencias de ello, toda vez que hay investigaciones preliminares que demoran meses, incluso años. El hecho de que una investigación demore demasiado afecta los principios de proporcionalidad, legalidad y el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, entre otros.

El NCPP ha solucionado este problema, ya que concede al fiscal un plazo de 20 días para que lleve a cabo las diligencias preliminares, salvo en los casos en que existan personas detenidas –en estos casos las diligencias preliminares se deben realizar en el

plazo de 24 horas—, o en delitos de tráfico ilícito de drogas o terrorismo —en que el plazo es de 15 días—. El plazo de 20 días puede ser prorrogado por el fiscal si considera que las características, complejidad y circunstancias de los hechos así lo ameritan. Si el abogado defensor del sospechoso o del agraviado considera que ese plazo es excesivo, puede solicitarle al fiscal que dé término a la investigación y dicte la resolución que corresponda.

Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado, o fija un plazo irrazonable o excesivo, quien se considere perjudicado puede acudir al juez de la investigación preparatoria para que, en mérito a una función de juez de garantía, determine si el fiscal se ha excedido en el plazo para la actuación de las diligencias preliminares, programando una audiencia con la presencia del fiscal y del solicitante, en la que ambas partes explicarán, por un lado, por qué es importante dicho plazo ampliatorio, y por otro, por qué resulta excesivo.

En tal sentido, queda claro que el juez de la investigación preparatoria puede intervenir antes de la formalización de la investigación (es decir, en las diligencias preliminares), sin que ello implique que el fiscal se encuentra por ello obligado a disponer la formalización, pudiendo el fiscal válidamente disponer el archivo definitivo.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

- Presencia del fiscal en las diligencias preliminares:

El artículo 330, numeral 1 del NCPP, precisa que “el fiscal puede bajo su dirección requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la investigación preparatoria”; por su parte, el numeral 3 señala que “el fiscal al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos”.

En tal sentido, el fiscal, en su condición de director de la investigación, puede realizar por sí mismo las diligencias preliminares de investigación, o puede requerir la intervención de la PNP. Ello podría llevarnos a entender que el fiscal estará presente en todas las diligencias llevadas a cabo en su despacho, pero puede no estarlo en aquellas que se llevan a cabo, por disposición suya, en la PNP. Sin embargo, eso no es así. El fiscal debe estar presente en las diligencias que se llevan a cabo en su despacho y en la

PNP, ya que él es el conductor de la investigación y es quien controla jurídicamente los actos de investigación que aquella realiza (artículos IV.1 y IV.2 del NCPP).

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

El hecho de que el fiscal esté presente en todas las diligencias es lo más idóneo, sobre todo si con el NCPP las diligencias preliminares han adoptado mayor relevancia, al tener la facultad de acusar directamente solo con diligencias preliminares; empero, por cuestiones de carga procesal y de tiempo, ello es imposible.

Al respecto, la Fiscalía de la Nación ha emitido la Directiva N° 001-2007-MP-ETII/CPP, aprobado por Resolución N° 243-2007-MP-FN, de fecha 20 de febrero de 2007, que es de aplicación obligatoria para todos los fiscales de los distritos judiciales en los cuales está vigente el NCPP, en la que establece que: “los fiscales dirigen la investigación del delito desde su inicio; deben participar en las diligencias policiales que dispongan, con excepción de aquellas que por razones geográficas y de urgencia puede practicar la PNP conforme a lo previsto por el CPP”.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

La idea de la investigación preparatoria es recabar la mayor cantidad de elementos de convicción para que, por un lado, el fiscal sustente su acusación, y, por otro, la defensa defina la estrategia con la que hará frente a la imputación. Es evidente que si el fiscal está presente en las diligencias que se llevan a cabo en esta etapa –tanto en la fase de diligencias preliminares como en la investigación preparatoria propiamente dicha– va a tener mayor conocimiento de los hechos, va a conocer mejor los pormenores del caso, y, por lo tanto, va a poder sustentar mejor y con mayor claridad su acusación, o, de lo contrario, con absoluta firmeza solicitará la absolución o solicitará una terminación anticipada.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Hay que reiterar que con el NCPP el fiscal puede formular acusación una vez culminadas las diligencias preliminares (artículo 336.4 del NCPP), y que tales diligencias son irrepetibles en la etapa de investigación preparatoria –instrucción–; por lo que resulta imprescindible que el fiscal esté presente durante el desarrollo de las diligencias preliminares, e intervenga en estas como un verdadero conductor y director de la investigación.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

Otro aspecto importante a tener en consideración es que los fiscales son los más interesados en que las diligencias preliminares se lleven a cabo dentro del marco de la legalidad, respetando los derechos fundamentales del inculpado y del agraviado. Si el policía que viene llevando a cabo una declaración se torna agresivo e intimidante con el declarante, el fiscal de inmediato debe intervenir para apartar a dicho instructor de la investigación, o para solucionar el problema que se presente de la manera que considere adecuado; pero, aquel fiscal que no estuvo presente en la diligencia no tendrá conocimiento qué es lo que sucedió, cómo, dónde, por qué o cuándo. Si a nivel de juicio

oral se cuestiona determinada diligencia, el fiscal que estuvo presente sabrá cómo rebatir tal cuestionamiento, pero aquel que no lo estuvo no estará en capacidad de hacerlo.

La organización de las instituciones a la luz del Código de 1940 impide que se puedan aplicar las disposiciones a las que se ha hecho referencia. Por ejemplo, en la Policía adscrita al Ministerio Público de Lima existen más de doce departamentos policiales, con aproximadamente ocho oficiales investigadores en cada departamento. Solamente hay tres fiscales asignados que tienen que estar presentes en todas las declaraciones y diligencias, y participar en estas.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

Otro ejemplo claro es la Dirección de Investigación Criminal de Lima, donde se han asignado tres fiscales para todos los departamentos (estafas, secuestros, robos, desaparecidos, homicidios, alta tecnología, entre otros). Este sistema de organización admite: 1) que sea imposible para los fiscales asignados estar presentes en todas las diligencias (lo usual es que lleguen al final y formulen un par de preguntas, o incluso hay casos en los que únicamente se les consigna a pesar de no haber asistido); 2) que el fiscal a cargo de la investigación, quien finalmente resolverá, no es quien interviene en las diligencias, motivo por el cual no se generará en él la convicción que esperamos.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

Con la aplicación del NCPP los fiscales deben participar en las diligencias que se llevan a cabo en la PNP, salvo por razones geográficas o de urgencia. El NCPP implica la creación de fiscalías corporativas, en las que varios fiscales trabajan los diversos casos a cargo de un despacho, lo cual les permite estar presente en las diligencias y coordinar con la PNP cómo se debe llevar la investigación, fijando los tiempos y estableciendo las pautas.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Las diligencias preliminares culminan con una resolución de archivo definitivo dictada por el Ministerio Público o con la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria (artículo 336 del NCPP).

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

- La investigación preparatoria en puridad:

El hecho de que el fiscal se haya convertido en el director de esta fase de la investigación es un aspecto importante del cambio, toda vez que con el Código de Procedimientos Penales de 1940 era el juez instructor quien dirigía la investigación judicial.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

La formalización de la investigación preparatoria implica que el fiscal ya no podrá archivar lo actuado sin intervención judicial (artículo 339 del NCPP), por ello sostengo que no estamos ante un modelo acusatorio puro. Si en el curso de la investigación preparatoria el fiscal llega a la conclusión de que el inculpado no cometió el delito, que

el hecho no constituye delito, o que se han presentado causas de justificación, ya no podrá disponer el archivo de la investigación, sino que ahora solo podrá solicitar el sobreseimiento al juez de la investigación preparatoria.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

El plazo de la investigación preparatoria es de 120 días naturales, prorrogables hasta 60 días más. Hubo quienes postularon que el plazo de las diligencias preliminares debía contabilizarse como parte del plazo de la investigación preparatoria, y otros, por el contrario, sostuvieron que se trata de dos plazos independientes. Estoy de acuerdo con esta segunda posición, siendo recién cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria que se empieza a contar el plazo de los 120 días. La norma claramente establece un plazo prorrogable para las diligencias preliminares, y otro plazo también prorrogable para la investigación preparatoria propiamente dicha.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se

deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

Si la investigación preparatoria es compleja, el plazo será de ocho meses. La prórroga la concede el juez, lo cual no significa que el fiscal debe esperar que transcurra dicho plazo, pudiéndose dar por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha logrado su objetivo.

Si vencidos los plazos el fiscal no da por concluida la investigación, las partes pueden pedir al juez su conclusión. Si este la ordena, el fiscal debe pronunciarse en un lapso de 10 días, formalizando acusación o requiriendo el archivamiento.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

En el marco de la investigación preparatoria, el fiscal debe realizar las diligencias de investigación que sean pertinentes y útiles. Las diligencias preliminares no deben repetirse durante la investigación preparatoria; obviamente, procede su ampliación si resulta indispensable al advertirse un grave defecto en su actuación, o porque deba completarse al incorporarse nuevos elementos de convicción. El fiscal puede disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de cualquiera que pueda informar sobre circunstancias útiles; puede requerir información a particulares o funcionarios públicos.

También puede disponer la concurrencia de peritos. Las partes pueden requerir al fiscal la realización de determinadas diligencias, y este dispondrá su realización si es que las estimas conducentes. La discrepancia sobre su procedencia la resuelve el juez en audiencia de control de legalidad. También se regula en la investigación preparatoria la circulación y entrega vigilada de bienes y la existencia de agentes encubiertos (artículos 337, 340 y 341 del NCPP).

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

La investigación preparatoria concluye al cumplirse su objeto o por vencimiento del plazo, debiendo reiterar que las discrepancias entre el fiscal y las partes, con respecto al vencimiento del plazo, será resuelta por el juez (artículos 342 y 343 del NCPP).

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

- El juez de la investigación preparatoria:

El juez asume competencia al recibir la comunicación del fiscal informándole que ha formalizado la investigación (artículo 29 del NCPP). El juez de la investigación

preparatoria tiene un rol tutelar. Con el Código de 1940 el juez era el director de la investigación judicial, sin embargo, ahora su rol ha cambiado; no es más el director de la investigación, ese rol lo ha asumido –como debe ser– el fiscal. Ahora el juez tiene un rol de garantía, de tutela de los derechos fundamentales de las partes en el proceso.

El juez debe autorizar la constitución de las partes, resolver las excepciones, cuestiones previas, prejudiciales, realizar los actos de prueba anticipada, entre otros. También resolverá las medidas cautelares personales, tales como la detención preliminar judicial y la audiencia de convalidación (artículos 261, 264, 265 y 266 del NCPP), la prisión preventiva (artículo 268 del NCPP), la audiencia para su adopción (artículo 271 del NCPP), su plazo (artículo 272 del NCPP), apelación (artículo 278 del NCPP), prolongación (artículo 274 del NCPP), cese (artículo 283 del NCPP), la incomunicación (artículo 280 del NCPP), la comparecencia (artículos 286, 287 y 291 del NCPP), la detención domiciliaria (artículo 290 del NCPP), el impedimento de salida del país (artículo 295 del NCPP), y la internación preventiva (artículo 293 del NCPP). Asimismo, el juez resolverá cuando el fiscal solicita medidas cautelares reales, tales como el embargo (artículo 303 del NCPP), la orden de inhibición (artículo 310 del NCPP), el desalojo preventivo (artículo 311 del NCPP), las medidas anticipadas (artículo 312 del NCPP), las medidas contra personas jurídicas (artículo 313 del NCPP) y la pensión alimenticia (artículo 314 del NCPP).

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a

los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

El juez también deberá resolver en aquellos casos en los que la búsqueda de las pruebas solicitadas por la fiscalía implique la restricción de derechos (artículos 202 y 203 del NCPP), tales como el control de identidad policial (artículo 205 del NCPP), videovigilancia (artículo 207), pesquisas, retenciones (artículo 208 del NCPP), registro de personas (artículo 210 del NCPP), intervención corporal (artículo 211 del NCPP), allanamiento (artículos 214, 216, 217 del NCPP), exhibición e incautación de bienes (artículos 218, 220, 316, 317, 318), exhibición e incautación de actuaciones de documentos no privados (artículo 224 del NCPP), interceptación e incautación postal (artículo 226 del NCPP), intervención de comunicaciones y telecomunicaciones (artículos 230 y 231 del NCPP), aseguramiento e intervención de documentos privados, contables y administrativos (artículos 232, 233 y 234 del NCPP), levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria (artículos 235 y 236), clausura o vigilancia de locales e inmovilización (artículo 237 y 241), entre otros.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

El fiscal durante la investigación preparatoria podrá solicitar ante el juez los requerimientos relacionados con las medidas de coerción procesal, personales o reales, prueba anticipada, o la restricción de determinados derechos del imputado, lo cual deberá

sustentar oralmente en audiencia ante el juez, el imputado, su abogado defensor, y, de ser el caso, la parte agraviada. Será el juez quien resuelva acerca de estos requerimientos.

Por otro lado, cuando el inculcado considera que ha vencido el plazo de la investigación preliminar, o que el plazo dispuesto por el fiscal es muy elevado; o cuando considere que se ha vencido el plazo de la investigación preparatoria, está facultado a recurrir al juez de la investigación preparatoria, quien resolverá la solicitud previa realización de una audiencia, con intervención de todas las partes (artículo 343, numerales 2 y 3). Queda claro que durante la investigación preparatoria el juez tiene un rol de garantía, de tutela y de control.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

- El rol de la Policía Nacional del Perú:

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

- **El rol del abogado defensor:**

El NCPP fortalece y revaloriza el papel del defensor legal. El defensor legal es clave en el nuevo modelo. Teniendo en cuenta que se trata de un modelo donde las actuaciones procesales son eminentemente orales, el abogado defensor debe ser un profesional preparado, que pueda sustentar verbalmente su tesis jurídica de defensa, y con la claridad y coherencia en su razonamiento. Ya no se trata de un juicio donde predomina lo escrito, aquí predomina lo oral, lo cual garantiza la contradicción e igualdad de armas.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

Con el nuevo modelo adquieren gran importancia las técnicas de litigación oral, así como tener conocimiento de los aspectos procesales y sustantivos del Derecho Penal, para que los abogados puedan ejercer una defensa eficiente de los intereses de sus defendidos. Asimismo, es de tener en consideración que, en razón de la publicidad de los procesos penales, las partes pueden asistir al proceso y a las diligencias, siendo ellas quienes realicen el control de calidad respecto del profesionalismo de su abogado defensor.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se

deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

También son importantes las técnicas del interrogatorio. Por ejemplo, un abogado que conoce sobre técnicas de interrogatorio podrá oponerse ante una pregunta oscura, ambigua o capciosa. El abogado que no conoce tales técnicas no sabrá cuándo oponerse, y puede suceder que al responderse la pregunta no objetada se incluya al proceso información perjudicial para los intereses del cliente. En Chile, los magistrados pueden suspender a un abogado en la defensa de determinado cliente si es que se percatan de que su labor la está realizando de manera negligente. Ello no ha sido previsto en el NCPP.

En este marco, la institución del defensor de oficio, como servicio dependiente del Ministerio de Justicia, debe ser fortalecida con recursos humanos y materiales, capacitando permanentemente al personal, implementando la infraestructura necesaria, tecnología y un presupuesto que les permita hacer frente, en igualdad de condiciones, al Ministerio Público como titular de la acción penal y al abogado de la parte civil.

- Análisis de los roles de las partes intervinientes en el proceso penal:

El NCPP constituye un cambio en la forma de concebir el proceso penal. El proceso se ha humanizado al hacerse efectivos una serie de derechos fundamentales que habían sido olvidados por el Código de 1940, y por el –inconstitucional– proceso sumario. Ello ha traído consigo una serie de cambios en la organización de las instituciones, y en el rol de los operadores penales, jueces, fiscales, abogados, policías y, en general, de todos

aquellos que intervienen en el sistema penal, asistentes judiciales, asistentes fiscales, secretarios, escribanos, etc.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

Como hemos visto, el sujeto cuyo rol ha sufrido el cambio más importante es el Ministerio Público, ya que se ha convertido en el director y conductor de la investigación, tanto preliminar como preparatoria propiamente dicha, otorgándosele una serie de facultades y atribuciones, como ordenar y practicar los actos de investigación que correspondan, a fin de obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos y la identificación a los autores o partícipes en su comisión, decidiendo la estrategia de investigación adecuada al caso; solicitar la terminación anticipada del proceso y la suscripción de acuerdos reparatorios, entre otras.

Vencido el plazo, el fiscal tiene que pronunciarse. Si no ha identificado a los autores del ilícito, o si falta algún informe o alguna evidencia en la investigación, se deberá emitir resolución de archivo provisional, para que, una vez que se identifique a los autores o se emitan los informes necesarios, se reabra la investigación, y se emita pronunciamiento conforme a ley.

- Teorías imperantes:

a) Teoría de la legalidad:

El principio de legalidad señala, por un lado, que: “el Ministerio Público debe realizar investigaciones cuando existe sospecha de que se ha cometido un hecho con carácter delictivo y, por otra parte, que está obligada a acusar cuando concluidas las investigaciones sigue existiendo esa sospecha vehemente” (Prado, 2016, p. 84).

b) Teoría de la funcionalidad:

Sin una adecuada política de racionalización de recursos y que ante la sociedad pierde credibilidad; “pero a pesar que el fiscal conoce que esas denuncias no tienen destino, apela algunas veces a la persecución penal pública absoluta e irrestricta” (San Martín, 2014, p. 66).

- Teoría seleccionada:

En suma, “los representantes del Ministerio Público deben mantener la independencia de sus funciones como titulares de la acción penal, y como directores de la investigación criminal, rechazando enérgicamente cualquier injerencia interna (de otros Fiscales de igual o mayor jerarquía), o externa (de otras instituciones públicas o privadas)” (Palma, 2014, p. 76).

(Bramont, 2014) afirma que: “no obstante, cabe precisar que, en la práctica, será más que dificultoso o dígase improbable, que el agente fiscal, en el desarrollo de las investigaciones pueda asumir un doble papel: como agente persecutor del delito, y a la vez, como abogado del imputado” (p. 75).

- Marco histórico:

El Ministerio Público es una institución de antigua data en el mundo; por lo que su naturaleza jurídica en el derecho comparado de no es uniforme, de tal suerte que podemos encontrar elementos que diferencien esta institución en el mundo, y en nuestro país, aunque su génesis sea común; pero para el tema de tesis, tenemos que ver cuál es la función del Ministerio Público en el proceso penal. El Ministerio Público es de origen francés. Pero para parte de la doctrina, como Mosquera, considera que en Grecia y Roma se pueden encontrar sus antecedentes más remotos.

Este tipo de proceso se le conoció como acusatorio. “El derecho de acusar, por tanto, correspondía exclusivamente a la víctima. Pero, los acuerdos o arreglos que se producían entre las partes, obligaron al Estado a establecer condiciones para que el delito no quedase impune” (Carrasco, 2016, p. 85).

- Marco jurídico:

Debe referirse que el artículo 159° de la Constitución Política establece de forma expresa las facultades del Ministerio Público.

Básicamente, entre las diferentes funciones que se la ha asignado constitucionalmente, se ha establecido que una de sus atribuciones es la de ser titular de la acción penal, así como también la de defender la legalidad.

Ahora bien, dentro del proceso penal, es importante reconocer que el Ministerio Público debe ceñirse al principio de legalidad y su actuación debe realizarse de forma objetiva e independiente, ya que es un organismo constitucionalmente autónomo.

1.2. Investigaciones

En el ámbito local no ha sido posible determinar antecedentes que hayan desarrollado el estudio de la presente.

En el ámbito nacional, se citan las siguientes investigaciones:

(Chávez, 2015) con su tesis titulada: “La delimitación de funciones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en el nuevo código procesal peruano”, sustentada en la Universidad Cesar Vallejo. La presente investigación tuvo por objeto: determinar una de las principales problemáticas surgidas a raíz de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal de 2004 en determinados Distritos Judiciales.

La investigación ha propendido a que se oriente a establecer una clara delimitación de funciones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, ya que el Código Procesal Penal ha establecido que la labor de investigación debe realizarse de forma coordinada y armónica.

(Baltázar, 2018) con su investigación titulada: “Conflictos funcionales entre Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, Lima – 2017”, sustentada en la Universidad Cesar Vallejo.

(Dávila, 2016) con su tesis titulada: “La aplicación del nuevo código procesal penal y la relación funcional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en la eficacia de la investigación del delito en lima metropolitana en el periodo 2014 – 2015”, sustentada en la Universidad de Huánuco. Demostrándose la falta de capacidad para las investigaciones de ilícitos penales, cuando los delincuentes son capturados por la policía y puestos a disposición de la fiscalía y estos son liberados por falta de pruebas en menos

de 24 horas y vuelven a delinquir con más agresividad amenazando a la sociedad y aumentando la sensación inseguridad ciudadana, quienes pierden la confianza del trabajo que realiza el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

A nivel internacional se referencia la siguiente investigación:

(Gramajo, 2015) con su tesis titulada: “El ministerio público y la policía nacional civil: entes encargados de la investigación criminal”, sustentada en la Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

1.3. Marco conceptual

a) Ministerio Público:

El rol fundamental del Ministerio Público “es la dirección de la investigación del delito, liderará en tal sentido el trabajo en equipo con sus fiscales adjuntos y la policía” (Aguilar, 2012, p. 95).

- b) Diligencias preliminares:** las diligencias preliminares consisten en un “conjunto de actos realizados por el fiscal o por la policía, por encargo de aquél o por urgencia y necesidad” (Fuenzalida, 2015, p. 89).

CAPÍTULO II

EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1. Planteamiento del problema

2.1.1. Descripción de la realidad problemática

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales

En tal sentido, se estima como una obligación normativa la urgencia de lograr en el proceso penal una adecuada igualdad entre las partes que participan, cuales son la parte acusadora y la parte acusada, el mismo que implica que para ellas la posibilidad de poder intervenir en el proceso en condiciones de igualdad en relación a las garantías fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, se estima que se debe centrar la atención en momentos procesales en los que el principio de igualdad de armas es esencialmente notorio, y así motivar a los juzgadores a motivarla.

Ahora bien, el ejercicio de la función del Ministerio Público no sólo se debe realizar en conformidad a sus funciones orgánicas propias y autónomas, sino que también debe desarrollar sus funciones de forma coordinada con las labores que desempeña la Policía Nacional del Perú, toda vez que será fundamental que exista un trabajo coordinado sobre todo en la etapa de investigación, propio de la sub etapa de diligencias preliminares.

2.1.2. Antecedentes teóricos

De esta forma, existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

En tal sentido, debe considerarse que la labor del Ministerio Público debe corresponderse con un adecuado tipo de trabajo que haga en relación a la policía, ya que son entidades que cuentan con diferentes funciones, y no debe limitarse sólo a ejecutar determinados actos institucionales sin fomentar la cooperación o coordinación entre entidades, ya que lo esencial es que exista un proceso adecuado de funciones entre dichas entidades.

Gramajo (2015), en su tesis sobre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil: entes encargados de la investigación criminal, determina que los entes encargados de llevar a cabo la investigación criminal dentro del Proceso Penal son el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil; el Ministerio Público, teniendo a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa, sirviendo de auxilio al Ministerio Público en las tareas de investigación. Para el correcto desarrollo de la investigación criminal, es de suma

importancia que existan excelentes relaciones de comunicación y coordinación entre los dos entes designados para el efecto, a fin de que no surjan problemas de funciones y la escena del crimen sea aprovechada al máximo. Sin embargo, se concluyó que en la actualidad estas relaciones de comunicación y coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil son ineficaces dentro de la investigación del hecho delictivo, lo que desemboca en un mal manejo de la escena del crimen, lo que a su vez provoca una desvalorización y una falta de certidumbre de los medios probatorios que se deben aportar al proceso penal para la correcta aplicación de justicia, y la dictadura de una sentencia justa.

Tomando en cuenta el estudio y análisis del derecho comparado, se propone la creación de una policía judicial que sea especializada únicamente en la investigación criminal y realice la función investigativa sin subordinación de ningún ente, con las facultades necesarias para ser parte en los procesos que se quieren aclarar.

2.1.3. Delimitación del problema

a) Problema general:

¿Existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019?

b) Problemas específicos:

- ¿Existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019?

- ¿Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019?

2.2.Finalidad y objetivos de la investigación

2.2.1. Finalidad

2.2.2. Objetivo general y específicos

Objetivo general:

Determinar si existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019.

Objetivos específicos:

- Establecer si existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019.
- Determinar si existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019.

2.2.3. Delimitación de la investigación

Delimitación temporal

La investigación se desarrolló considerando como datos de estudio el año 2019.

Delimitación espacial

La investigación se desarrolló en la ciudad de Huancayo.

Delimitación social

La investigación consideró como delimitación social a abogados especialistas en Derecho Procesal Penal, para evaluar a través del cuestionario aplicado, los conflictos funcionales entre el rol Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo,

2.2.4. Justificación e importancia del estudio

Justificación teórica

Sobre la ambigüedad existente en la poca definición de lo que significa conducir el aspecto investigativo de la Fiscalía cuando se indica que uno de los aspectos importantes sobre las delimitaciones de funciones fiscal y policial, es ocasionado por la poca definición que presenta la fiscalía sobre el término “conduce” la investigación del delito. Al respecto, la carta política del Estado señala en su Artículo 159 que el MP conduce desde el inicio la investigación del delito. Para ello, la PNP se sujeta a lo que mande el MP en este campo funcional; y, en su Art. 166 la PNP garantiza, mantiene y restablece el ordenamiento nacional. Colabora con los individuos y con la sociedad en general. Cubre las necesidades para cumplir la legislación. Prevé, investiga y combate la delincuencia. Monitorea y supervisa los límites fronterizos. Así, el MP conduce jurisdiccionalmente sus funciones. Conduce el proceso en el ámbito jurídico, pero no en el campo de la criminalidad. Quien debe dirigir el proceso de investigación en el campo penal es la Fiscalía, es decir debe conducir el tema investigativo sin ordenar a la Policía

como debe realizar su trabajo operativo de investigación, al contrario, debe recaudar los factores relevantes para su trabajo fiscal judicial, y quien debe conducir operativamente la investigación del delito debe ser la Policía. O sea, debe establecer los aspectos periciales o probatorios de cualquier crimen.

La institución policial es quizás una de las expresiones estatales más antiguas del orbe. Se trata pues de una estructura de caracteres singulares que, por sus funciones y naturaleza, requiere nuestra atención. Así pues, para conocer sus alcances, hemos de conocer los orígenes de su denominación y sus dimensiones conceptuales.

Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

Justificación metodológica

La presente investigación contribuye metodológicamente con la elaboración del instrumento de medición documental que se elaborará para el estudio de las variables objeto de estudio, denominado cuestionario, y pueda ser utilizado en el futuro por investigadores sobre la materia.

Es fundamental señalar que el instrumento de investigación presentado cumple con los estándares metodológicos de coherencia y relación, siendo fundamental que dicho cuestionario ha sido planteado por las características metodológicas del enfoque escogido, ya que al ser una tesis de carácter jurídico social se ha buscado básicamente establecer un instrumento que cumpla también con el tipo de investigación determinado.

Justificación práctica

Se debe señalar que la presente investigación en cuanto a su justificación práctica se ciñe en el hecho de que será de utilidad para quienes se desenvuelven en el ámbito penal, y específicamente, en quienes desarrollan una labor asentada en la función fiscal y policial.

Se debe plantear que, a nivel práctico, ambas instituciones cuentan con una determinada labor cuya finalidad es poder investigar hechos delictivos, por ello, la presente se justifica en la medida que sirve para que los operadores jurídicos puedan observar cómo se deben delimitar las atribuciones y competencias funcionales entre dichas instituciones.

Justificación social

La investigación se justifica socialmente porque beneficia a la comunidad en general, permitirá prospectivamente analizar los conflictos funcionales existentes entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, el cual motiva a la necesidad de revisar la función fiscal en los llamados operativos policiales. Para ello, en primer término, al fiscal le corresponde la persecución del delito. Pero, dicha persecución está relacionada con el cúmulo de funciones y atribuciones inherente a los actos preparatorios (investigación preliminar), el ejercicio propiamente dicho (formalización de denuncia y acusación fiscal) y culminación (retiro de acusación, opinión de sobreseimiento e impugnación) de la acción penal y no así a un seguimiento que, por la literalidad a la que estamos acostumbrados ha generado la confusión entre perseguir el delito con perseguir al delincuente, función esta última, asociada a los acciones de aprehensión, intervención,

captura, etc. que son función eminentemente policial y en las que, por interpretación sistemática, no le resulta exigible participar al fiscal pues su función no es policial.

2.3. Hipótesis y variables

2.3.1. Supuestos teóricos

Sobre el análisis de las relaciones funcionales entre el Ministerio Público y la Policía Nacional durante la investigación preparatoria y el Binomio necesario en la investigación criminal según el Nuevo Código Procesal Penal – 2004 (Salas, 2010) se ha señalado que uno de los principales problemas surgidos a raíz de la puesta en vigencia el NCPP, es el conflicto en la relación funcional del MP y PNP por ciertas vejaciones fiscales a los policías, así como renuencia de los policías a acatar las disposiciones fiscales e, incluso, resistencia al sistema implementado para los procesos penales.

2.3.2. Hipótesis principal y especificaciones

Hipótesis principal:

Existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019, al hallarse diferentes problemas vinculados a la duplicidad de atribuciones.

Hipótesis específicas:

-Existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019, al hallarse diferentes problemas vinculados a la duplicidad de atribuciones.

-Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019, al hallarse diferentes problemas vinculados a la duplicidad de atribuciones.

2.3.3. Variables e indicadores

- Variables:

Conflictos funcionales.

Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú.

- Indicadores:

Duplicidad de atribuciones.

Interferencias.

CAPÍTULO III

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS

3.1. Población y muestra

- Universo:

Constituida por los jueces, fiscales y abogados especialistas en Derecho Procesal Penal de la ciudad de Huancayo de la ciudad de Huancayo.

- Población:

La población se encuentra constituida por 45 jueces, fiscales y abogados especialistas en Derecho Procesal Penal de la ciudad de Huancayo.

- Muestra:

La muestra se encuentra constituida por el mismo número de la población, ya que es un número reducido.

3.2. Diseño de investigación

Se utilizó un diseño no experimental, de tipo transversal o transeccional, porque los datos de estudio serán recolectados en un determinado momento. Además, es de tipo descriptivo simple.

Los métodos generales que se utilizaron en la presente investigación serán el método de análisis – síntesis, el análisis definido por (Sutherland, 2001) como “la

operación intelectual que posibilita descomponer mentalmente un todo complejo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones y componentes” (p. 76). En tanto que la síntesis es definida por el citado autor como “aquella operación intelectual que establece mentalmente la unión entre las partes, previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y características generales entre los elementos componentes de un fenómeno o proceso” (p. 55).

Y asimismo se utilizó el método de inductivo - deductivo, definido por (Revoredo, 2011) de la siguiente manera: “el razonamiento deductivo funciona trabajando desde lo más general hacia lo más específico. Se puede comenzar pensando en una teoría sobre algún tema de interés (...) el método inductivo trabaja de modo opuesto: se empieza desde lo más específico hasta las generalizaciones y teorías más amplias. En el razonamiento inductivo, se comienza con unas observaciones y medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales” (p. 76).

3.3. Técnica e instrumento de recolección de datos

Las técnicas de investigación que se utilizaron son el análisis documental y la observación.

De acuerdo a (Sutherland, 2001), el análisis documental consiste en aquel “conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo”.

Y asimismo se utilizó la observación, que para (Revoredo, 2011) es “una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos”.

Debe referirse que los instrumentos de investigación sirvieron para recolectar los datos aquí expuestos, considerando que estos también se han formulado en una correcta relación con el instrumento referidos.

De otro lado, para su determinación, este tipo de técnicas se ha considerado de acuerdo al tipo de investigación también planteado, porque esto debe ser en cumplimiento del principio de coherencia metodológica.

Como instrumento de la investigación se utilizó el cuestionario, el mismo que se aplicó a la muestra seleccionada, en este caso, a jueces, fiscales y abogados especialistas en Derecho Procesal Penal.

3.4. Procesamiento de datos

Respecto del procesamiento y análisis de datos que se empleó en la presente investigación, se consideró utilizar sólo un tratamiento descriptivo para su desarrollo, a partir de los criterios dogmáticos que se han esbozado sobre este aspecto problemático según la doctrina y la jurisprudencia.

CAPÍTULO IV

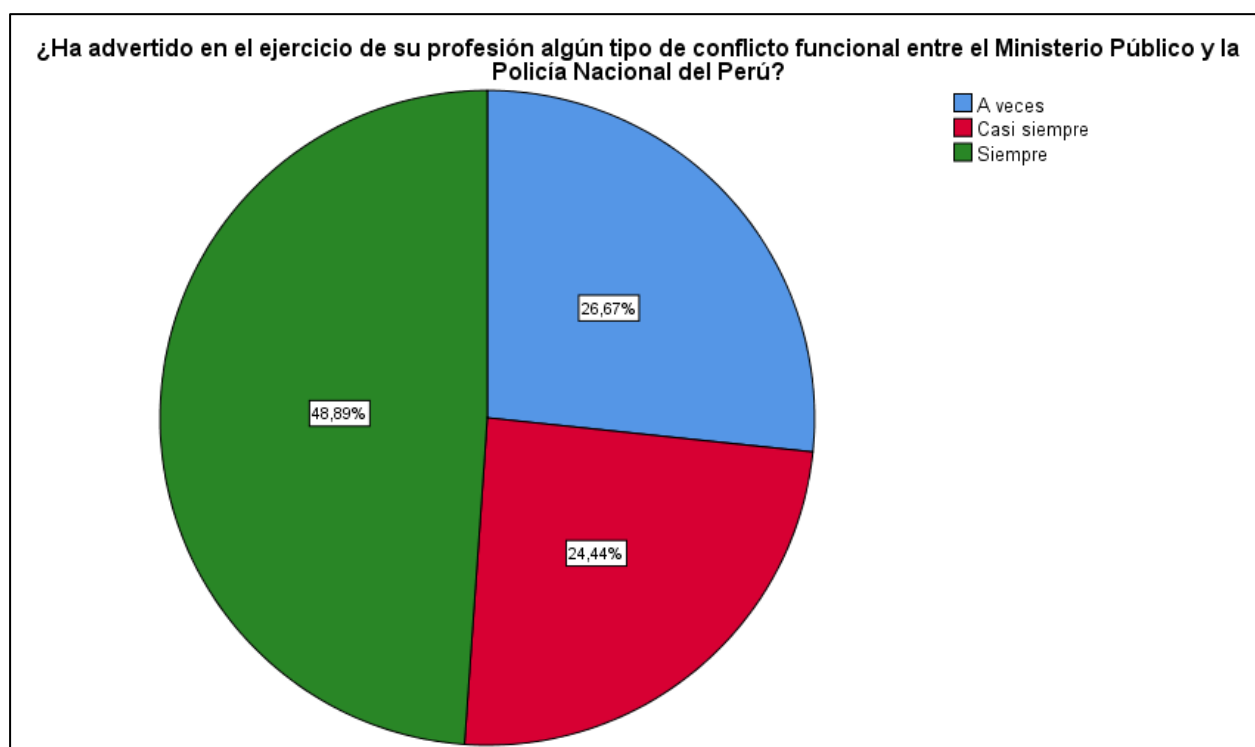
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1. Presentación de resultados

- **ÍTEM NRO. 01:**

Tabla 1: ¿Ha advertido en el ejercicio de su profesión algún tipo de conflicto funcional entre la Fiscalía y la PNP?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	A veces	12	26,7	26,7	26,7
	Casi siempre	11	24,4	24,4	51,1
	Siempre	22	48,9	48,9	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

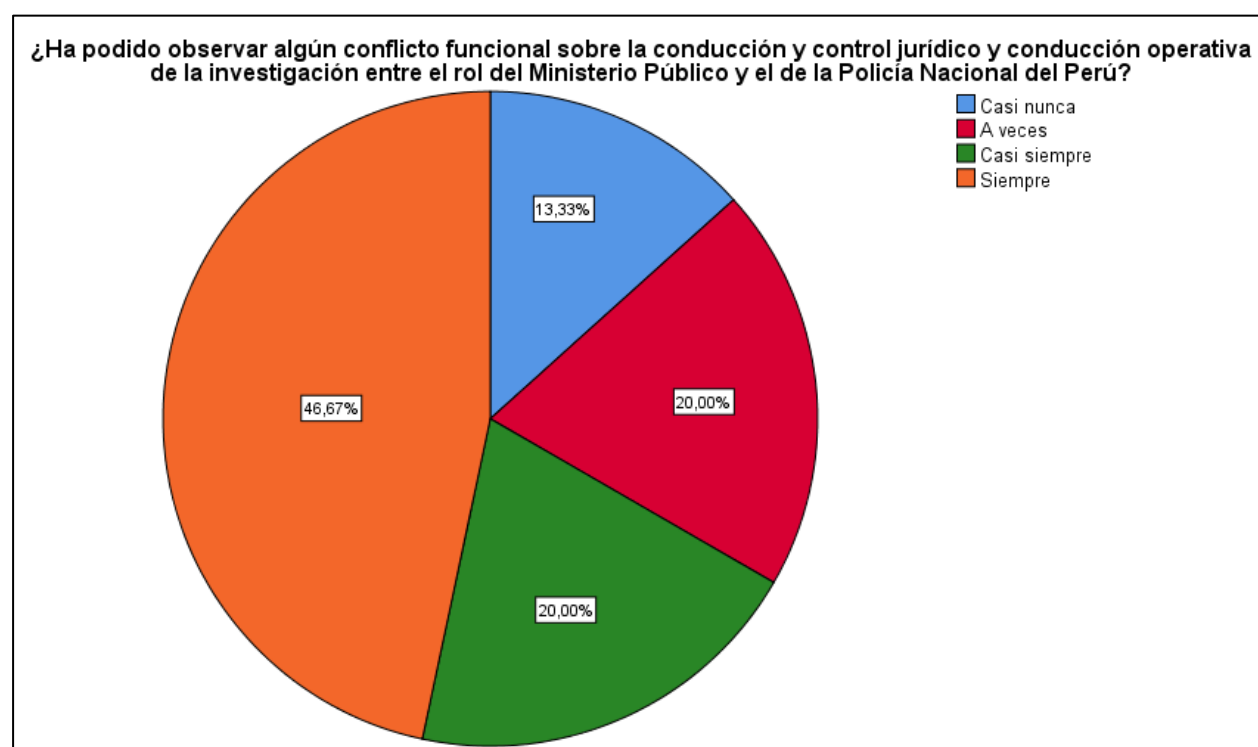


Interpretación: Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si han advertido en el ejercicio de su profesión algún tipo de conflicto funcional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, han respondido que esto se da a veces (26.67%), casi siempre (24.44%) y siempre (48.89%).

- **ÍTEM NRO. 02:**

Tabla 2: ¿Ha podido observar algún conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol de la Fiscalía y la PNP?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Casi nunca	6	13,3	13,3	13,3
	A veces	9	20,0	20,0	33,3
	Casi siempre	9	20,0	20,0	53,3
	Siempre	21	46,7	46,7	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

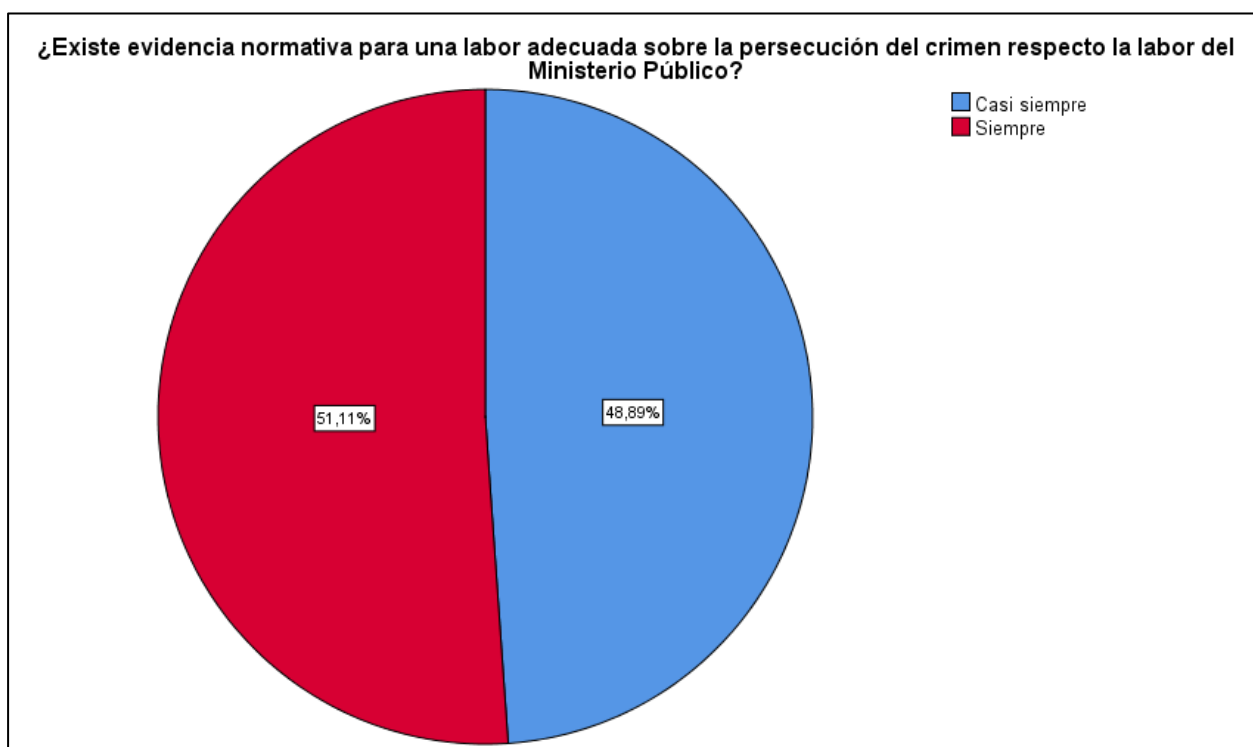


Interpretación: Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si han podido observar algún conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, han respondido que esto se da casi nunca (13.33%), a veces (20%), casi siempre (20%) y siempre (46.67%).

- ÍTEM NRO. 03:

Tabla 3: ¿Existe evidencia normativa para una labor adecuada sobre la persecución del crimen respecto la labor de la Fiscalía?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Casi siempre	22	48,9	48,9	48,9
	Siempre	23	51,1	51,1	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

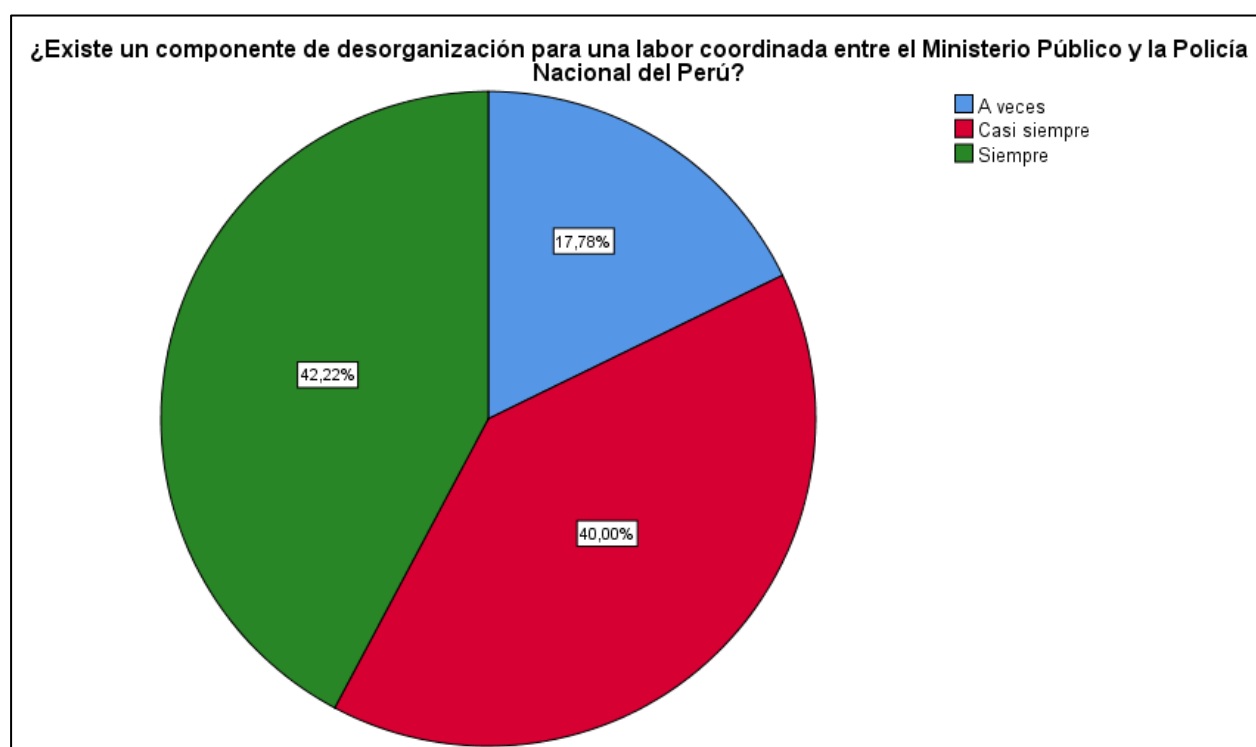


Interpretación: Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si existe evidencia normativa para una labor adecuada sobre la persecución del crimen respecto la labor del Ministerio Público, han respondido que esto se da casi siempre (48.89%) y siempre (51.11%).

- ÍTEM NRO. 04:

Tabla 4: ¿Existe un componente de desorganización para una labor coordinada entre la Fiscalía y la PNP?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	A veces	8	17,8	17,8	17,8
	Casi siempre	18	40,0	40,0	57,8
	Siempre	19	42,2	42,2	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

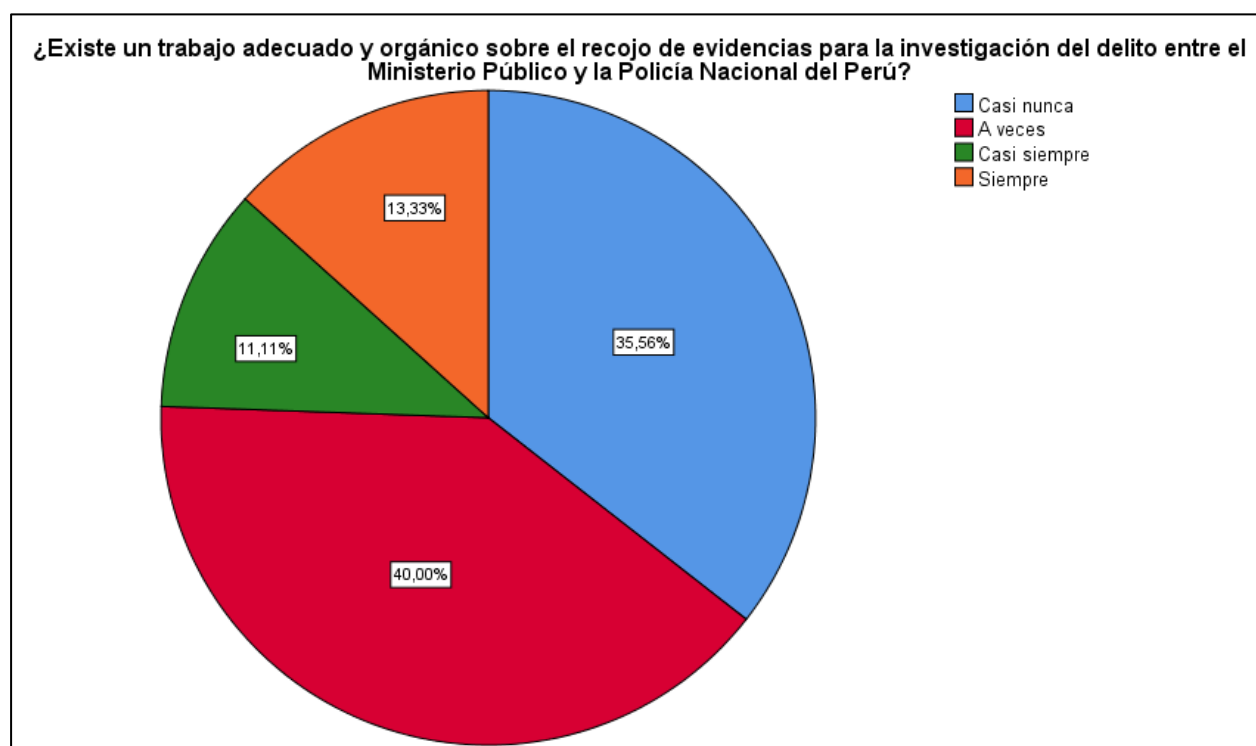


Interpretación: Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si existe un componente de desorganización para una labor coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, han respondido que esto se da a veces (17.78%), casi siempre (40%) y siempre (42.22%).

- **ÍTEM NRO. 05:**

Tabla 5: ¿Existe un trabajo adecuado y orgánico sobre el recojo de evidencias para la investigación del delito entre la Fiscalía y la PNP?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Casi nunca	16	35,6	35,6	35,6
	A veces	18	40,0	40,0	75,6
	Casi siempre	5	11,1	11,1	86,7
	Siempre	6	13,3	13,3	100,0
	Total	45	100,0	100,0	



Interpretación: Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si existe un trabajo adecuado y orgánico sobre el recojo de evidencias para la investigación del delito entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, han respondido que esto se da casi nunca (35.56%), a veces (40%), casi siempre (11.1%) y siempre (13.33%).

- **ÍTEM NRO. 06:**

Tabla 6: ¿Existe un trabajo coordinado sobre la investigación de delitos entre la Fiscalía y la PNP?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Casi nunca	25	55,6	55,6	55,6
	A veces	11	24,4	24,4	80,0
	Casi siempre	4	8,9	8,9	88,9
	Siempre	5	11,1	11,1	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

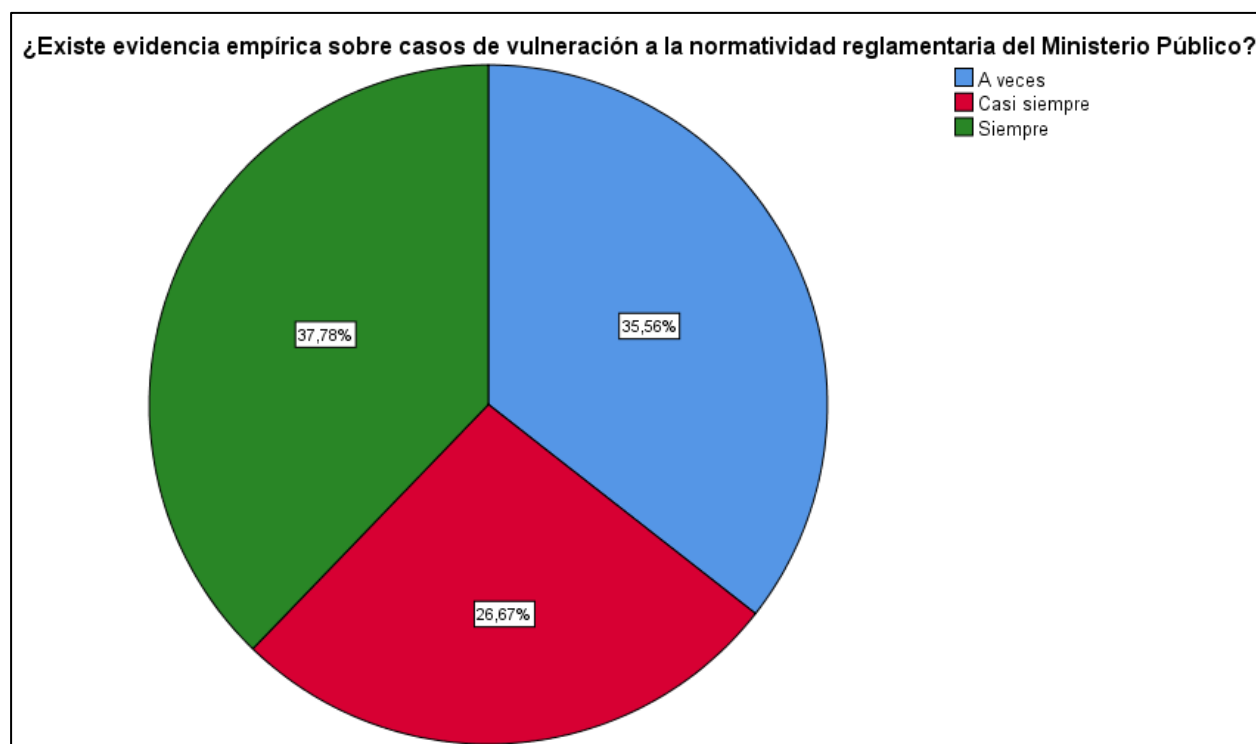


Interpretación: Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si existe un trabajo coordinado sobre la investigación de delitos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, han respondido que esto se da casi nunca (55.56%), a veces (24.44%), casi siempre (8.89%) y siempre (11.11%).

- **ÍTEM NRO. 07:**

Tabla 7: ¿Existe evidencia empírica sobre casos de vulneración a la normatividad reglamentaria de la Fiscalía?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	A veces	16	35,6	35,6	35,6
	Casi siempre	12	26,7	26,7	62,2
	Siempre	17	37,8	37,8	100,0
	Total	45	100,0	100,0	



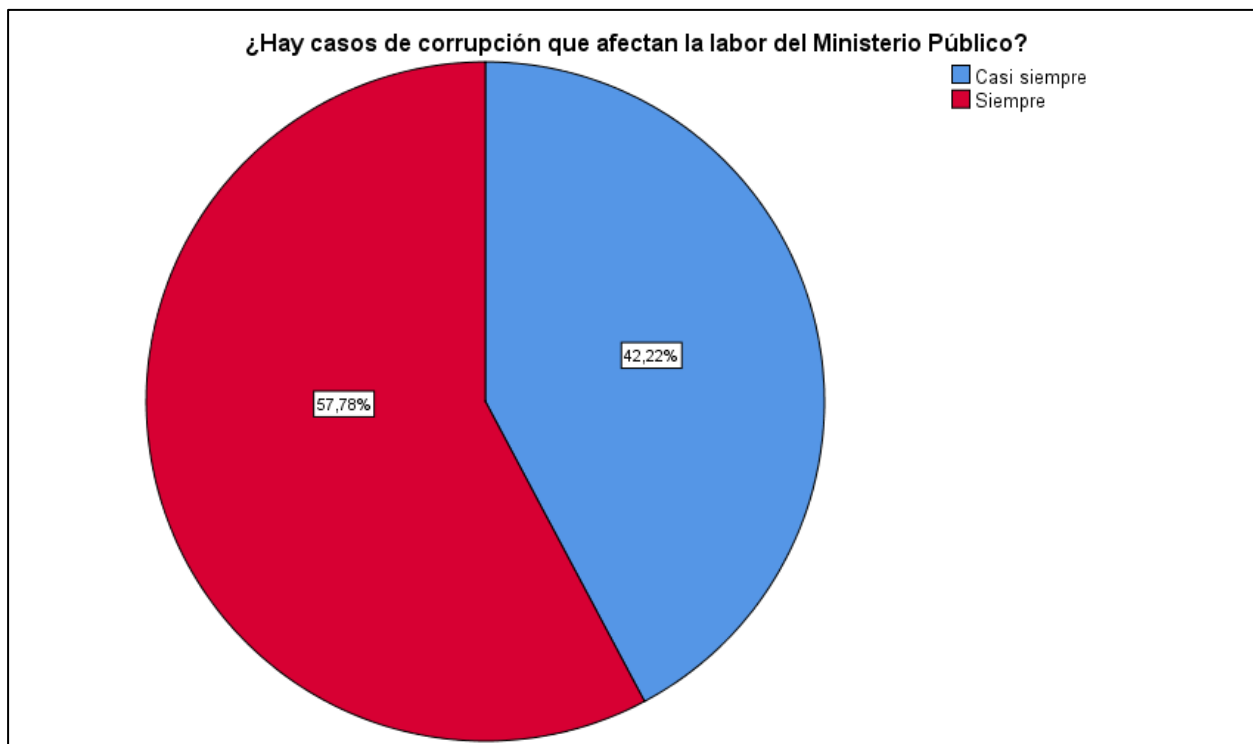
Interpretación: Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si existe evidencia empírica sobre casos de vulneración a la normatividad reglamentaria del Ministerio Público, han respondido que esto se da a veces (35.56%), casi siempre (26.67%) y siempre (37.78%).

- ÍTEM NRO. 08:

Tabla 8: ¿Hay casos de corrupción que afectan la labor de la Fiscalía?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Casi siempre	19	42,2	42,2	42,2

Siempre	26	57,8	57,8	100,0
Total	45	100,0	100,0	

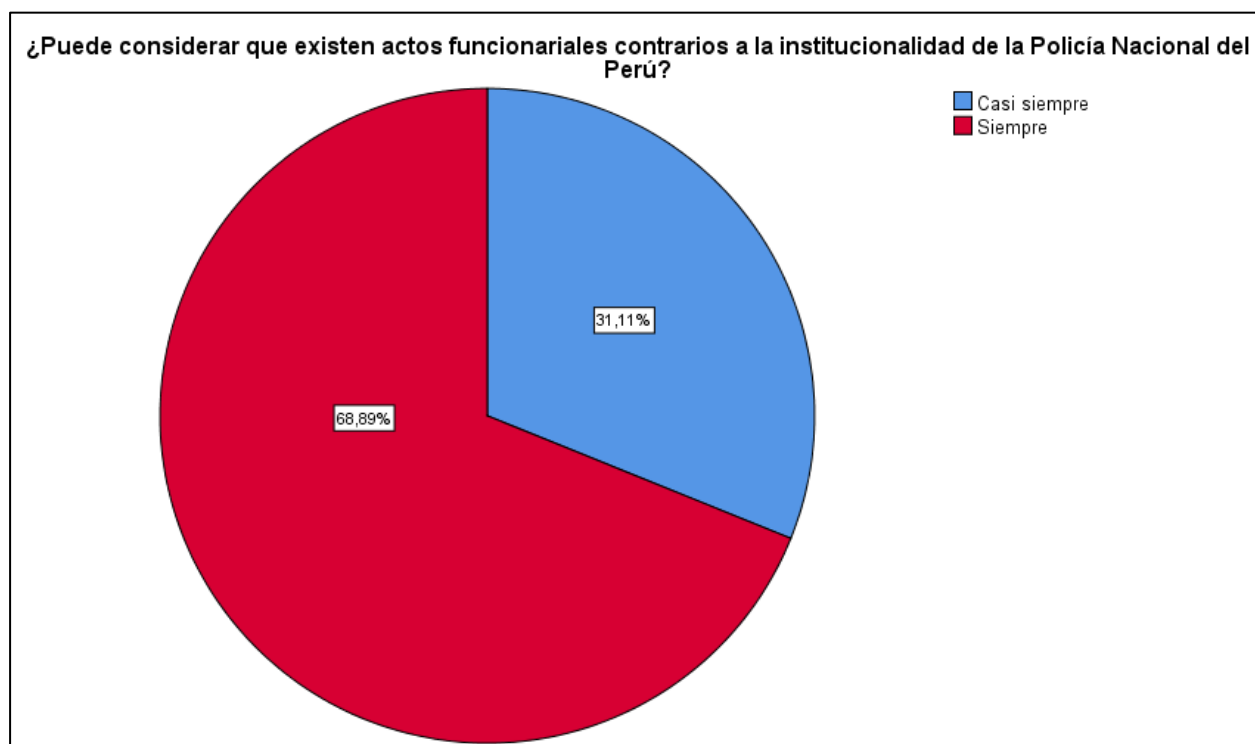


Interpretación: Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si hay casos de corrupción que afectan la labor del Ministerio Público, han respondido que esto se da casi siempre (42.22%) y siempre (57.78%).

- **ÍTEM NRO. 09:**

Tabla 9: ¿Puede considerar que existen actos funcionariales contrarios a la institucionalidad de la PNP?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Casi siempre	14	31,1	31,1	31,1
	Siempre	31	68,9	68,9	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

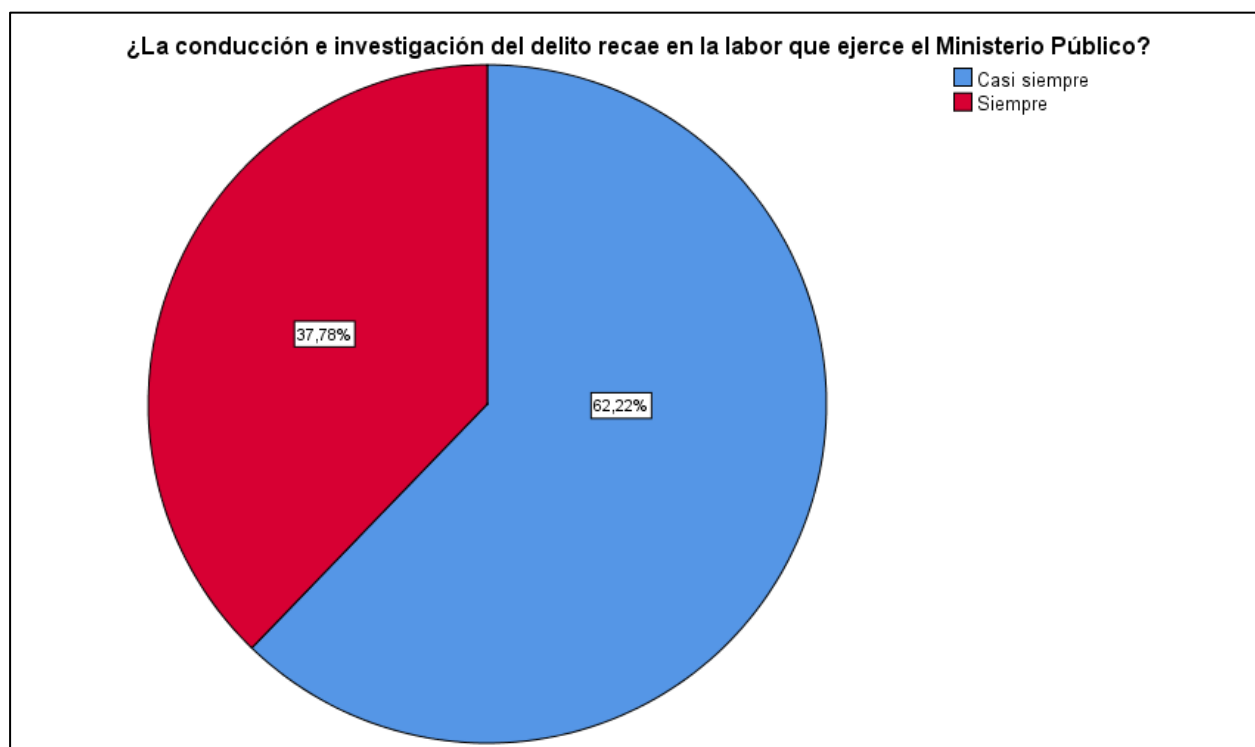


Interpretación: Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si puede considerar que existen actos funcionariales contrarios a la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú, han respondido que esto se da casi siempre (31.11%) y siempre (68.89%).

- ÍTEM NRO. 10:

Tabla 10:¿La conducción e investigación del delito recae en la labor que ejerce la Fiscalía?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Casi siempre	28	62,2	62,2	62,2
	Siempre	17	37,8	37,8	100,0
	Total	45	100,0	100,0	



Interpretación: Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si la conducción e investigación del delito recae en la labor que ejerce el Ministerio Público, han respondido que esto se da casi siempre (62.22%) y siempre (37.78%).

4.2. Contrastación de hipótesis

Derivado de nuestros objetivos planteados, podemos determinarla del siguiente modo:

Del objetivo general:

Se ha planeado como objetivo general, determinar si existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019. Así pues, al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si han advertido en el ejercicio de su profesión algún tipo de conflicto funcional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da a veces (26.67%),

casi siempre (24.44%) y siempre (48.89%). Por otro lado, respecto de si han podido observar algún conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da casi nunca (13.33%), a veces (20%), casi siempre (20%) y siempre (46.67%). Por último, respecto de si existe un componente de desorganización para una labor coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da a veces (17.78%), casi siempre (40%) y siempre (42.22%).

En ese sentido, se puede decir que, en efecto, existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo.

Específicos:

Se ha planteado como objetivo específico primero, establecer si existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019. En efecto, al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si han podido observar algún conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da casi nunca (13.33%), a veces (20%), casi siempre (20%) y siempre (46.67%). Así también, respecto de si existe evidencia normativa para una labor adecuada sobre la persecución del crimen respecto la labor del Ministerio Público, en respondido que esto se da casi siempre (48.89%) y siempre (51.11%). Por último, respecto de si existe un componente de desorganización para una labor coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en

respondido que esto se da a veces (17.78%), casi siempre (40%) y siempre (42.22%). En ese sentido, se puede decir que, en efecto, existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019.

Se ha planteado como objetivo específico segundo, determinar si existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019. En efecto, Al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si existe un trabajo coordinado sobre la investigación de delitos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da casi nunca (55.56%), a veces (24.44%), casi siempre (8.89%) y siempre (11.11%). En ese sentido, se puede decir que, en efecto, existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019.

- Discusión de resultados:

De la aplicación de nuestro cuestionario, al ser encuestados un grupo de 45 abogados especialistas en derecho penal y procesal penal de la ciudad de Huancayo, respecto de si han advertido en el ejercicio de su profesión algún tipo de conflicto funcional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da a veces (26.67%), casi siempre (24.44%) y siempre (48.89%). Respecto de si han podido observar algún conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da casi nunca (13.33%), a veces (20%), casi siempre (20%) y siempre (46.67%). Respecto de si existe evidencia

normativa para una labor adecuada sobre la persecución del crimen respecto la labor del Ministerio Público, en respondido que esto se da casi siempre (48.89%) y siempre (51.11%). Respecto de si existe un componente de desorganización para una labor coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da a veces (17.78%), casi siempre (40%) y siempre (42.22%). Respecto de si existe un trabajo adecuado y orgánico sobre el recojo de evidencias para la investigación del delito entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da casi nunca (35.56%), a veces (40%), casi siempre (11.1%) y siempre (13.33%). Respecto de si existe un trabajo coordinado sobre la investigación de delitos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da casi nunca (55.56%), a veces (24.44%), casi siempre (8.89%) y siempre (11.11%). Respecto de si existe evidencia empírica sobre casos de vulneración a la normatividad reglamentaria del Ministerio Público, en respondido que esto se da a veces (35.56%), casi siempre (26.67%) y siempre (37.78%). Respecto de si hay casos de corrupción que afectan la labor del Ministerio Público, en respondido que esto se da casi siempre (42.22%) y siempre (57.78%). Respecto de si puede considerarse que existen actos funcionariales contrarios a la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú, en respondido que esto se da casi siempre (31.11%) y siempre (68.89%). Respecto de si la conducción e investigación del delito recae en la labor que ejerce el Ministerio Público, en respondido que esto se da casi siempre (62.22%) y siempre (37.78%).

Concluimos por ello que, existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo; así como también, existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019; y por último, existe conflicto funcional sobre la

conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019.

Por otro lado, con la tesis de (Dávila, 2016, quien concluye que,)tan pronto como entró en vigencia el NCPP en los diferentes distritos judiciales del país, también entró en vigencia la desidia, la descoordinación, la falta de colaboración y la falta de trabajo en equipo, toda vez que los efectivos policiales entraron en celo, por la competencia de las investigaciones preliminares, demostrándose la falta de capacidad para las investigaciones de ilícitos penales, cuando los delincuentes son capturados por la policía y puestos a disposición de la fiscalía y estos son liberados por falta de pruebas en menos de 24 horas y vuelven a delinquir con más agresividad amenazando a la sociedad y aumentando la sensación inseguridad ciudadana, quienes pierden la confianza del trabajo que realiza el Ministerio Público y la Policía Nacional

Capítulo V: Conclusión y Recomendaciones

5.1. Conclusión

- Existen determinados conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, que se evidencian al momento de incoarse la etapa de investigación preparatoria, y precisamente en la sub etapa de diligencias preliminares, ya que la falta de capacitación entre los servidores públicos de ambas instituciones ocasiona cierta duplicidad de funciones.
- Existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, porque a nivel operativo y práctico la Policía muchas veces realiza su labor sin considerar la actuación material de la Fiscalía, generando una duplicidad innecesaria de labores y carga procesal.
- Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, principalmente en las diligencias preliminares que se encuentran orientadas a recabar los primeros recaudos testimoniales y probatoria para la conducción de la investigación.

5.2. Recomendaciones

- Se sugiere que exista una mayor capacitación al personal de la Policía Nacional del Perú como también al Ministerio Público sobre el rol y trabajo en conjunto de ambas instituciones en la etapa de investigación, de modo que se eviten conflictos funcionales o duplicidad de los mismos.
- Se recomienda que la labor de la Policía Nacional del Perú debe ser adecuadamente reglamentada principalmente en la sub etapa de diligencias preliminares a fin de evitar una defectuosa labor de investigación o interferir en la labor del Ministerio Público.
- Se sugiere que el Ministerio de Justicia publique y distribuya un Manual de Actuación Fiscal y Policial en las Diligencia Preliminares, con el objetivo que trabajen de forma coordinada y articulada en diferentes investigaciones, y no sólo generando innecesariamente conflictos funcionales.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, L. (2012). *Proceso Penal y rol del Ministerio Público*. Lima: Grijley.
- Balaguer, J. (2016). *Ministerio Público y Derecho a la defensa*. Lima: UNMSM.
- Baltázar, J. W. (2018). *Conflictos funcionales entre Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, Lima – 2017*. Lima: Universidad César Vallejo.
- Bazán, D. (2010). *Metodología de la investigación. Razanamientos*. Arequipa: UNSA.
- Bramont, L. (2014). *Código Procesal Penal*. Lima: Grijley.
- Cafferata, J. (2000). *Proceso penal y Derechos Humanos*. Buenos Aires: Del puerto.
- Carrata, A. (2001). *Funciones de la Prueba*. Milán: Cedam.
- Dávila, J. C. (2016). *La aplicación del nuevo código procesal penal y la relación funcional entre el ministerio público y la policía nacional del Perú en la eficacia de la investigación del delito en Lima Metropolitana en el periodo 2014 - 2015*. Lima: Universidad de Huánuco .
- Espinoza, B. (2011). *Ministerio Público en el sistema procesal penal*. Lima: Legis.
- Estrada, J. (2014). *Ministerio Público y Código Procesal Penal de 2004*. Lima: LEX.
- Ferreccio, J. (1999). *Poder y Derecho de Policía*. Montevideo : Editores .
- Fuenzalida, J. (2015). *Ministerio Público*. Lima: San Marcos.
- Garay, J. (2008). *Ciencia Policial como parte de las ciencias sociales*. Mexico D.F.: Fondo Editorial ESUPOL.
- Gramajo, F. (2015). *El ministerio publico y la policía nacional civil: entes encargados de la investigación criminal* . Quetzaltenango: universidad rafael landívar.
- Hinostroza, G. (2008). *Fundamentos de Doctrina y Ciencia Policial*. Lima: Policia Nacional del Perú.
- Hurtado, J. (1983). *El Ministerio Público, 2da. Edición* . Lima: Autoeditado.

- Lauregui, A., & otros. (2009). *El Ministerio Público*. Cusco: Universidad Católica los Angeles de Chimbote .
- Manosalva, J. (2013). *Doctrina Policial y Ciencias Policiales*. Lima: Autoeditado.
- Palma, C. (2014). *Comentarios a los roles institucionales de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú*. Lima: Ara.
- Paredes, M. (2013). *Constitución Política Comentada*. Bogotá: Código.
- Ramiro, D. (2010). *Derecho de defensa y constitucionalismo*. México D.F.: Atlas.
- Reza, D. (1999). *Investigación jurídica*. Lima: UNMSM.
- Salas, C. (2013). *Rol del Miinisterio Públlco y Policía Nacional del Perú*. Lima: JURISTAS.
- San Martín, C. (2000). *Derecho Procesal Penal. Vol. II*. Lima: Ed. Grijley.

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
<p style="text-align: center;">GENERAL:</p> <p>¿Existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019?</p> <p style="text-align: center;">ESPECÍFICOS</p> <p>-¿Existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019?</p> <p>-¿Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019?</p>	<p style="text-align: center;">GENERAL:</p> <p>Determinar si existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019.</p> <p style="text-align: center;">ESPECÍFICOS</p> <p>-Establecer si existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019.</p> <p>-Determinar si existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional</p>	<p style="text-align: center;">HIPÓTESIS PRINCIPAL:</p> <p>Existen conflictos funcionales entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019, al hallarse diferentes problemas vinculados a la duplicidad de atribuciones.</p> <p style="text-align: center;">HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:</p> <p>-Existe conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019, al hallarse diferentes</p>	<p>-Conflictos funcionales.</p> <p>-Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú.</p>	<p>DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Diseño no experimental.</p> <p>POBLACIÓN Y MUESTRA: POBLACIÓN La población se encuentra constituida por 45 jueces, fiscales y abogados especialistas en Derecho Procesal Penal de la ciudad de Huancayo.</p> <p>MUESTRA La muestra se encuentra constituida por el mismo número de la población, ya que es un número reducido.</p> <p>TÉCNICAS DE RECOPIACIÓN DE DATOS:</p>

	del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019.	<p>problemas vinculados a la duplicidad de atribuciones.</p> <p>-Existe una deficiente delimitación de roles o duplicidad de las funciones criminalísticas del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Huancayo, 2019, al hallarse diferentes problemas vinculados a la duplicidad de atribuciones.</p>		<p>Análisis documental y observación.</p> <p>INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN</p> <p>Cuestionario</p>
--	---	---	--	--

CUESTIONARIO

INSTRUCCIÓN. Lea usted atentamente el presente cuestionario y responda a las siguientes preguntas, marcando con una X la que considere pertinente:

PREGUNTAS:

1. ¿Ha advertido en el ejercicio de su profesión algún tipo de conflicto funcional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú?

- 1. Nunca ()
- 2. Casi nunca, ()
- 3. A veces ()
- 4. Casi siempre ()
- 5. Siempre ()

2. ¿Ha podido observar algún conflicto funcional sobre la conducción y control jurídico y conducción operativa de la investigación entre el rol del Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú?

- 1. Nunca ()
- 2. Casi nunca, ()
- 3. A veces ()
- 4. Casi siempre ()
- 5. Siempre ()

3. ¿Existe evidencia normativa para una labor adecuada sobre la persecución del crimen respecto la labor del Ministerio Público?

- 1. Nunca ()
- 2. Casi nunca, ()
- 3. A veces ()
- 4. Casi siempre ()
- 5. Siempre ()

4. ¿Existe un componente de desorganización para una labor coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú?

- 1. Nunca ()
- 2. Casi nunca, ()
- 3. A veces ()
- 4. Casi siempre ()
- 5. Siempre ()

5. ¿Existe un trabajo adecuado y orgánico sobre el recojo de evidencias para la investigación del delito entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú?

- 1. Nunca ()
- 2. Casi nunca, ()

- 3. A veces ()
- 4. Casi siempre ()
- 5. Siempre ()

6. ¿Existe un trabajo coordinado sobre la investigación de delitos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú?

- 1. Nunca ()
- 2. Casi nunca, ()
- 3. A veces ()
- 4. Casi siempre ()
- 5. Siempre ()

7. ¿Existe evidencia empírica sobre casos de vulneración a la normatividad reglamentaria del Ministerio Público?

- 1. Nunca ()
- 2. Casi nunca, ()
- 3. A veces ()
- 4. Casi siempre ()
- 5. Siempre ()

8. ¿Hay casos de corrupción que afectan la labor del Ministerio Público?

- 1. Nunca ()
- 2. Casi nunca, ()
- 3. A veces ()
- 4. Casi siempre ()
- 5. Siempre ()

9. ¿Puede considerar que existen actos funcionariales contrarios a la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú?

- 1. Nunca ()
- 2. Casi nunca, ()
- 3. A veces ()
- 4. Casi siempre ()
- 5. Siempre ()

10. ¿La conducción e investigación del delito recae en la labor que ejerce el Ministerio Público?

- 1. Nunca ()
- 2. Casi nunca, ()
- 3. A veces ()
- 4. Casi siempre ()

